

otros los chilenos 15

490983
6

LOM
EDICIONES

Represión en dictadura: el papel de los civiles

FERNANDO VILLAGRÁN - FELIPE AGÜERO - MANUEL SALAZAR - MANUEL DÉLANO

320 490933
Z 426
C 1



LOM Ediciones Coahu y Toro 23 Santiago
Fono (56-2) 688 22 13 Fax (56-2) 696 63 88
web www.lom.cl

Nosotros los chilenos

Represión y dictadura: el papel de los chilenos



Impresión: LOM Ediciones Ltda.
Madruga 9 - 13, Santiago
Fono (56-2) 672 22 26 - (56-2) 672 26 12
Fax (56-2) 672 09 12

Impreso en Santiago de Chile

Se agradece el apoyo de la Fundación Ford a la investigación para los artículos de esta publicación.
FERNANDO WILLAGRAN - FELIPE AGUIERO - MANUEL SALAZAR - MARCELO DELANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES

©LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago
Fono: (56-2) 688 52 73 Fax: (56-2) 696 63 88
web: www.lom.cl
e-mail: lom@lom.cl

Registro de Propiedad Intelectual N° 151.672
ISBN: 956-282-793-3

Dirección y edición: Manuel Délano, Richard Vera y Silvia Aguilera
Fotografías: Claudio Pérez / IMA Agencia de fotógrafos
Diseño y diagramación: Claudia Quintero
Impresión: LOM Ediciones Ltda.
Maturana 9 - 13, Santiago
Fono: (56-2) 672 22 36 - (56-2) 672 56 12
Fax: (56-2) 673 09 15

Impreso en Santiago de Chile

Se agradece el apoyo de la Fundación Ford a la investigación para los artículos de esta publicación.



323.4909.83
R 426.
C.1



Represión en dictadura: el papel de los civiles

Nosotros los chilenos / 15

FERNANDO VILLAGRÁN - FELIPE AGÜERO - MANUEL SALAZAR - MANUEL DÉLANO
DIRECCIÓN FOTOGRÁFICA: CLAUDIO PÉREZ

Cuando el verdugo vistió de paisano

Fernando Villagrán¹

¹ Periodista y economista, ex subdirector de revista *APSI*, autor entre otros libros de *Disparren a la bandada*.



USARON DE LA MANO MILITAR PARA DESHACERSE DE SUS ENEMIGOS POLÍTICOS Y TOMAR VENGANZA DE LO OCURRIDO EN LOS MIL DÍAS DE LA UNIDAD POPULAR, PARA RECUPERAR BIENES Y PRIVILEGIOS, PARA NEUTRALIZAR DE MANERA RADICAL CUALQUIER TIPO DE OPOSICIÓN AL DESARROLLO DE UN MODELO QUE EXCLUÍA A QUIENES PENSABAN DISTINTO. EN LA ACCIÓN REPRESIVA DE LA DICTADURA HUBO DELACIÓN, COMPLICIDAD, JUSTIFICACIÓN, OCULTAMIENTO, NEGATIVA A ACEPTAR LA BARBARIE DE LO QUE ESTABA OCURRIENDO A PESAR DE LAS EVIDENCIAS APLASTANTES. LA RESPONSABILIDAD CIVIL ES COMPLEJA Y SE UBICA EN DIVERSOS NIVELES. EL DEBATE SOBRE ESTAS RESPONSABILIDADES ES UN TEMA AÚN PENDIENTE.

"¡Yakarta, Yakarta!" clamaban los diputados del Partido Nacional durante las agitadas discusiones con los parlamentarios de la Unidad Popular. Con ese grito iracundo evocaban la sangrienta represión militar que en Indonesia, ocho años antes, había culminado con el asesinato de entre 300.000 y un millón de miembros y simpatizantes del Partido Comunista.

A ese nivel de polarización había llegado en Chile en 1973. Para la derecha, la solución era un alzamiento militar que terminara con el gobierno y sus partidarios.

A pesar de la amplitud y gravedad de la crisis, el gobierno del Presidente Salvador Allende mantenía un sólido apoyo ciudadano. El 44,1% de la votación lograda por la Unidad Popular en la elección parlamentaria de marzo, la permanente movilización de las bases populares y su masiva presencia en los actos convocados por sus organizaciones refrendan el respaldo activo con que contaba el régimen elegido en 1970. Pero no era suficiente.

La oficialidad golpista de las Fuerzas Armadas contaba con un plan largamente afinado que apoyaban la CIA y el gobierno norteamericano. La complicidad de la derecha y los gremios empresariales y la traición del general Augusto Pinochet fueron el ingrediente final. El 11 de septiembre de 1973 el Palacio de La Moneda fue bombardeado y, en la capital, débiles y aislados intentos de resistir con las armas fueron aplastados con prontitud.

Tras este violento debut los uniformados desataron una acción de guerra que al frente encontró a un pueblo desarmado.

La instalación del nuevo orden implicaba erradicar cualquier riesgo de resistencia. Resultaba imprescindible destruir las organizaciones creadas por un movimiento social tan fuerte que había sido capaz de instalar a la izquierda como un actor vital en la sociedad chilena y hecho posible el triunfo de Salvador Allende en 1970.

El impacto histórico de la guerra fría, la siempre presente intervención de Estados Unidos y el fuerte arraigo social de los partidos de izquierda contribuían a la expectativa de una revancha sangrienta. Ya lo habían advertido los miembros de la Junta Militar en su primera aparición ante el país: su primer objetivo sería "extirpar el cáncer marxista".

A lo largo y ancho del país, la ciudadanía que había acompañado a Allende en sus tres años de gobierno comenzó a sufrir los rigores de una cruel represión, alentada e instigada por un sector de la civilidad que no perdonaba lo ocurrido durante los mil días de la UP.

La fuerza civil del terror

Grupos de civiles habían aportado al clima de preparación del golpe y al imponerse el poder de las armas celebraron sin pudor la muerte del Presidente, hicieron fe ciega en la acción de los uniformados y apoyaron la instalación de una dictadura bajo el eufemismo de un proceso de reconstrucción nacional.

Mientras tanto, connotados personajes de la derecha se sumaron a las tareas de la Junta, para llenar de contenidos el plan de recuperación del poder que sintieron arrebatado durante el gobierno de Allende.

La Junta de Gobierno pidió apoyo para exterminar el marxismo y una parte de la población que había pedido el golpe de Estado estaba más que dispuesta a aportar lo suyo en tan encomiable tarea. Transportistas, comerciantes, agricultores, profesionales, empresarios y vecinos que se habían jugado contra la izquierda sintieron que debían devolver la mano a los militares y se sumaron sin piedad a la represión que comenzaba a llenar estadios, barcos, recintos militares y policiales con dirigentes, militantes y simpatizantes del régimen derrotado.

La responsabilidad civil en la inspiración y materialización de las violaciones a los derechos humanos ha quedado registrada de manera esencial en los documentos del Informe Rettig, la Mesa de Diálogo y la Comisión Valech.

La delación fue una práctica alentada y premiada por la dictadura. Las listas de sospechosos aportadas por solícitos colaboradores constituyeron prueba para el ingreso de chilenos al círculo del horror.

El 17 de octubre de 1973 el llamado de una vecina bastó para que una patrulla militar acudiera hasta la Torre 12 de la Remodelación San Borja, en Santiago, para detener a cinco residentes que entre sí no tenían más vinculación que habitar el mismo edificio: la pareja de ciudadanos argenti-

LA DELACIÓN FUE UNA PRÁCTICA ALENTADA Y PREMIADA POR LA DICTADURA A LA QUE DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN SE SUMARON CON ENTUSIASMO EN POBLACIONES, INDUSTRIAS, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SECTORES RURALES.





La represión a los campesinos contó en muchos casos con el apoyo de latifundistas.

nos formada por Carlos Rodolfo Ader y Beatriz Díaz, quien se encontraba embarazada; el empresario Víctor Alejandro Garretón; Cristián Montecinos, funcionario del Fondo Monetario Internacional, y el dentista Julio Andrés Saa. Fueron ejecutados y sus cadáveres aparecieron más tarde botados en el kilómetro 12 de la ruta de Santiago a Valparaíso.

Fue uno entre cientos de episodios similares.

La ola represiva adquirió aún mayor barbarie en poblaciones y sectores rurales.

El 7 de octubre de 1973 carabineros de la Tendencia de Isla de Maipo detuvieron a quince campesinos: Sergio Maureira Lillo y sus hijos Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Alvarez y sus hijos Omar y Ramón; y los jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Los uniformados se movilizaban en vehículos del dueño del fundo donde se encontraban sus casas. El grupo de detenidos desapareció pero cinco años más tarde sus cuerpos destrozados fueron encon-

trados dentro de unos viejos hornos de cal en la localidad de Lonquén.

La odiosidad de los latifundistas se tradujo en sangrienta venganza. En muchos lugares usaron mano militar y policial para cobrar deudas políticas con humildes campesinos que fueron su contraparte en la reforma agraria iniciada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y profundizada por el régimen de Allende. Las detenciones, torturas y ejecuciones masivas de trabajadores agrícolas registradas en Salamanca, Santa Bárbara, Quilaco, Quilleco, Mulchén, Liquiñe y Entre Lagos, entre otros lugares, fueron ejecutadas por uniformados con apoyo activo y directo de civiles.

Si existe un sitio emblemático de esa aberrante colaboración cívico-militar, ése es el caso de Paine. Ubicado a sólo 40 kilómetros al sur de Santiago, ostenta el triste récord de ser el lugar de Chile que cuenta con mayor número de víctimas en relación a su población. Los ejecutados —en operaciones realizadas por civiles, carabineros y personal del Regimiento de Infantería de San Bernardo—, llegaron al centenar y los hechos vividos en esa localidad donde aún se cruzan a diario



La corte palaciega de la derecha que rodeaba a Augusto Pinochet y su esposa hasta hace pocos años. Hoy eluden acercarse al ex dictador procesado por crímenes y corrupción.



victimarios y familiares de las víctimas, configuran una de las historias más estremecedoras ocurridas bajo la dictadura. La masacre ha adquirido rangos de leyenda; sin embargo, la cruda realidad se puede constatar al visitar *el callejón de las viudas*, como denominan los habitantes de Paine un sector donde muchas familias perdieron a su jefe de hogar.

En los relatos de testigos y sobrevivientes recogidos en la investigación de la jueza María Estela Elgarrista, los nombres de Francisco Luzoro, Claudio Oregón y Jorge Sepúlveda se suman a los de otros civiles que actuaron como escuadrones de la muerte para eliminar a una larga nómina de hombres, en su gran mayoría jóvenes campesinos.

Un prestigioso abogado y militante derechista comentó en la época a un colega suyo que "ese sector ha quedado limpiecito". La eliminación de izquierdistas y sospechosos de izquierdismo permitió neutralizar eventuales peligros de oposición a la dictadura y también ajustar cuentas de manera implacable e impecable con quienes pudieran entorpecer los planes de los propietarios agrícolas del sector.

El pretexto del Plan Zeta

El clima de delación y odio delirante tiene otro jalón en los sucesos ocurridos en relación con el denominado Plan Zeta, una supuesta planificación de la izquierda para eliminar masivamente a militares y dirigentes de oposición en caso de un intento de golpe contra el gobierno.

Bajo este argumento, miles de personas sufrieron arresto y tortura. Los diarios autorizados por la dictadura acogieron y potenciaron el infundio con titulares que fueron eficaz pretexto para allanar hogares y poblaciones, lugares de trabajo y centros de estudio, con el objetivo de detener a ciudadanos de cualquier condición, incluidos decenas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que sufrieron la represión ejecutada por sus propios camaradas.

El 24 de marzo de 2002 en el diario *La Tercera*, el historiador Gonzalo Vial, ministro de Educación del régimen de Pinochet, dio algunas luces acerca del origen del Plan Zeta. Dijo que en los primeros meses después del golpe se le pidió que junto a un grupo de civiles redactara *El Libro Blanco de la Junta Militar* a partir

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL ACOGIERON Y AVALARON, SIN EL MÁS MÍNIMO INTENTO DE CRÍTICA, LA ARGUMENTACIÓN DE LOS MILITARES PARA JUSTIFICAR LAS DETENCIONES, TORTURAS Y ASESINATOS.

de la documentación recuperada en allanamientos, y que en medio de papeles del más diverso origen y calidad, venía lo que se llamó Plan Zeta: "Si usted lee bien el Plan Zeta, que está muy mal redactado por lo demás, se da cuenta que la idea que

expresó es un contragolpe, esto es, qué hacer si viene un golpe, naturalmente no estaba firmado por nadie". Consultado Vial acerca de

la verosimilitud de tal documento, respondió: "Algún cabeza caliente de la UP escribió ese documento, hizo varias copias y la distribuyó entre sus amigos. Ahora, si se llevó alguna vez a un principio de ejecución y si los que lo hicieron eran importantes o no, éstos son otros temas".

Centenares de inocentes fueron ejecutados por causa del Plan Zeta o se sumaron a las listas de desaparecidos.

La siembra del terror entre la población contó también con el apoyo explícito del poder judicial. El presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, el mismo que puso la banda presidencial a Pinochet, lo justificó de manera simple: "Aquí ha habido una guerra y si ellos la hubieran ganado estaríamos todos muertos". Con este argumento se sumó a la lógica del Plan Z y avaló en adelante todos los atropellos a los derechos humanos.

Un sector minoritario del PDC había expresado sus reparos al golpe militar y el cardenal Raúl Silva Henríquez desde el mismo día del golpe clamaba por respeto a los derrotados



anticipando lo que sería la conducta de la Iglesia en defensa de los derechos humanos. Pero estas reacciones tuvieron escasa cobertura por parte de una prensa alineada que dejó en el registro de la historia su obsecuencia con los actos criminales y la restricción absoluta de las libertades.

"¿En qué te estás metiendo amigo" "¿No ves que te están utilizando los comunistas?" Fueron comentarios que escucharon repetidamente desde el primer momento los abogados que defendieron a los prisioneros de la dictadura y conocieron, por tanto, de primera mano los horrores de la represión.

"No te metas con estos tipos. Es peligroso para ti y tu familia", escuchaban cuando intentaban sensibilizar a sectores de civiles que sabían lo que ocurría y lo justificaban como un mal menor, necesario por un tiempo. *"Se pondrá orden, se normalizará el país y ahí se entregará el gobierno a los civiles, muy probablemente a Frei",* escucharon también con impotencia y desazón algunos abogados demócrata cristianos comprometidos desde el primer día en la defensa de los detenidos.

Una represión conveniente

Pero entre la civilidad no sólo operaban mecanismos de justificación que apelaban a la lucha contra el caos marxista y la reconstrucción nacional. Hubo también un importante grupo en que el apoyo a la dictadura se traslapó con aspiraciones de índole económica y de recuperación de situaciones de poder. "Es el tiempo



General Humberto Gordon, jefe de la CNI, y Francisco Javier Cuadra, ministro de la dictadura: ¿quién mandaba?

para retomar buenos negocios, dejemos por un tiempo la política en mano de los militares", fue una máxima que reflejó bien a ese sector.

La mano militar era necesaria para quienes esperaban una rápida recuperación de sus bienes industriales y agrícolas expropiados bajo la Unidad



Popular y que constituían parte del área social de la economía que ahora sería reprivatizada. Ello se manifestaba en la instalación expectante de los Chicago boys y de representantes de grupos económicos en el entorno de la dictadura. Y también en operaciones directas de reapropiación que en muchos casos se materializaron junto con una represión sin control de los trabajadores de esas empresas.

Así como hubo una odiosa contrarreforma agraria, también en el sector industrial urbano el golpe se tradujo en persecución. Miles de trabajadores ubicados en el área de propiedad social fueron detenidos y maltratados en el Estadio Nacional y otros recintos del país.

Entre las 2.279 víctimas consignadas en el Informe Rettig figuran los nombres de más de 700 campesinos y obreros muertos por acción de agentes del Estado. El documento es abundante en testimonios que prueban la complicidad de empresarios, ejecutivos y funcionarios civiles en la persecución de trabajadores.

La empresa Elecmetal, ubicada en el cordón industrial Vicuña Mackenna, había sido intervenida por el Ministerio de Hacienda el año 1972. La

relación entre sus dueños y el sindicato había sido más que conflictiva. El 17 de septiembre de 1973 cinco dirigentes sindicales—Augusto Andino Alcayaga Aldunate, José Devia, José Maldonado Fuentes y a los hermanos Juan Dagoberto y Miguel Alberto Fernández Cuevas— fueron detenidos por un fuerte contingente uniformado “en presencia de los ejecutivos, dueños de la empresa y de los demás trabajadores”, según resume el Informe Rettig.

“Fueron conducidos en dos vehículos distintos, uno de los cuales pertenecía a Elecmetal. Se desconoce el recinto al que son conducidos y donde fueron ejecutados

Sus cuerpos fueron encontrados en la vía pública y remitidos al Instituto Médico Legal por carabineros del Retén Macul. La fecha de sus muertes corresponde al día 17 de septiembre entre las 10:50 horas y las 06:30 horas del día 18 de septiembre, siendo la causa de la muerte en todos los casos, múltiples heridas a bala”.

El 14 de octubre de 2000 cerca de mil personas participaron en una *funa* contra el empresario Ricardo Claro por estos hechos.

La contribución gremialista

Hospitales, universidades, colegios y reparticiones públicas y privadas conocieron también del ritual de los allanamientos, delaciones, listas de sospechosos, despidos y detenciones. La información aportada por funcionarios de esas instituciones a las nuevas autoridades militares en muchos casos dio origen a drásticos procesos represivos. Así ocurrió en el Banco del Estado con la acusación que hizo un grupo de administrativos sobre reuniones "de carácter político" entre ejecutivos de la administración anterior y altos oficiales de la Fuerza Aérea.

Los civiles fueron fundamentales en la construcción del nuevo orden en la dictadura. En la foto, Jaime Guzmán y Sergio Fernández.



En las universidades, los rectores delegados nombraron fiscales para controlar y resolver quienes podían continuar en actividades docentes y quienes debían ser expulsados o suspendidos en atención a sus antecedentes políticos. También fue normal la desaparición de carreras completas debido al perfil sospechoso de sus docentes y la eliminación de cátedras por sus contenidos considerados inconvenientes por los encargados de poner orden en el convulsionado ambiente académico.

El nuevo orden estaba en marcha y con ello también la instalación de un nuevo poder de civiles con proyecciones políticas. Fue el caso de la Universidad Católica donde, tras ser depuesto su rector, Fernando Castillo Velasco, la nueva autoridad designada, el vicealmirante Jorge Swett, instaló en cargos prominentes a un grupo de jóvenes gremialistas discípulos del abogado Jaime Guzmán, quien se había ya transformado en uno de los personajes más influyentes en la Junta Militar. Destacó entre ellos Hernán Larraín, primero como director de Estudios y luego como vicerrector de Comunicaciones y académico.

EN LAS UNIVERSIDADES LOS RECTORES MILITARES OPERARON CON MANO DE HIERRO. EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, ADEMÁS, SE VIVIÓ LA EXPERIENCIA DEL GREMIALISMO EN PUESTOS DE PODER POTENCIÁNDOSE PARA LA ACCIÓN POLÍTICA.

Al alero de la Universidad Católica, la comunidad gremialista se potenció como grupo político que con el andar de los años jugaría decisiva influencia en el régimen militar, para dar forma, hacia 1983, a lo que es hoy la UDI. Cristián Larroulet, Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick, entre otros, fueron presidentes de la FEUC por designación del rector delegado.

Pese a que incluyó el despido de cientos de académicos y administrativos y la cancelación de carreras y centros de investigación, en comparación con lo ocurrido en otros centros universitarios, la represión en la UC fue menor que en otras casas de estudios superiores. Muchos profesores y estudiantes fueron detenidos y más de 15 de ellos pasaron a engrosar la lista de desaparecidos. En ese proceso jugó un rol activo un grupo de estudiantes de la

UC que, identificado con el gremialismo en el período de la UP, tras el golpe apareció en tareas de inteligencia y realizando interrogatorios en el Estadio Nacional.

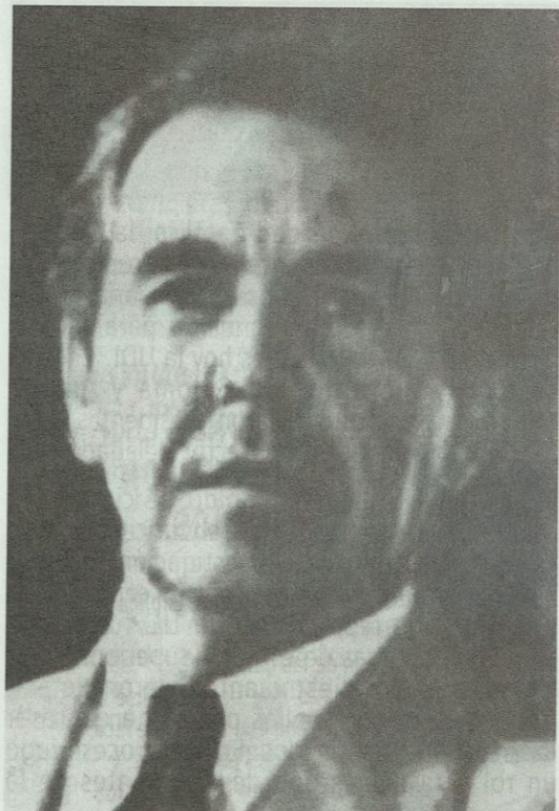
Otra joven promesa del gremialismo, Carlos Bombal, había sido elegido por el rector delegado como su jefe de gabinete. A comienzos de noviembre de 1975 Swett le encargó a Bombal, como era costumbre en esos casos, que recibiera a dos funcionarios de la DINA que llegaron a consultar por el docente Juan Avalos Davidson, a quien sindicaron como comunista. Los agentes le solicitaron toda la información disponible sobre el profesor y "le sugirieron" no avisar al director de la unidad académica correspondiente "ya que la orden que tenían era la de detener al señor Avalos sin testigos", según declaración de Bombal existente en el Informe Rettig. Obediente, el jefe de gabinete entregó los antecedentes personales requeridos y se abstuvo de alertar que estaba el académico siendo buscado por la DINA. Avalos fue apresado y el 20 de noviembre de 1975 se transformó en otro detenido desaparecido.

La manipulación del miedo

Por un largo tiempo operó entre muchos civiles el temor a ser declarado enemigo del régimen, con todas sus consecuencias. Pero también el drama vivido por el país demuestra la insuficiente cultura democrática y en materia de derechos humanos que permeaba la sociedad chilena.

Fueron considerables los grupos de profesionales que participaron activamente en las diversas formas que adquirió la represión. Abogados que se prestaron a la farsa de los consejos de guerra cuando actuaron como fiscales o auditores en tribunales militares. Médicos, enfermeras, psicólogos y psiquiatras que trabajaron como torturadores o instruyeron a los verdugos en la tipificación de las conductas de los extremistas y en los mecanismos para sacarles información. Funcionarios que suscribieron certificados de defunción falsos o protocolos de autopsia que ocultaban las causas reales de las muertes. Y emblemáticos fueron los casos de periodistas que justificaron y elogiaron la represión en reportajes, crónicas, editoriales y libros.

Después del Informe sobre la prisión política y tortura, en un mea culpa, Canal 13 de televisión recordó una información del periodista Claudio Sánchez en 1973, en la que se refería a las "buenas condiciones" en que estaban los prisioneros en el Estadio Nacional...



Pero frente a esta realidad, también hubo otra muy distinta. Abogados, profesionales de otras áreas y miembros de la Iglesia Católica y otros credos estuvieron dispuestos desde el primer momento a enfrentar el silencio del terror.

GREMIOS Y PROFESIONALES DE DIVERSAS ACTIVIDADES JUSTIFICARON LA REPRESIÓN O COLABORARON ACTIVAMENTE EN ELLA. PERO HUBO TAMBIÉN MUCHOS QUE ESTUVIERON DISPUESTOS DESDE EL PRIMER MOMENTO A ENFRENTAR EL SILENCIO DEL TERROR.

Con el paso de los meses, mientras las direcciones de los partidos de izquierda en la clandestinidad sufrían la encarnizada y selectiva represión de la DINA, el PDC tomaba distancia del régimen al que había justificado en sus inicios, y emitía una primera declaración de protesta por las violaciones a los derechos humanos, que se dio a conocer fuera del país.

A fines de 1974 surgía la incipiente Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En febrero de 1975 un grupo de doce aboga-

dos hizo una presentación ante la Junta Militar denunciando hechos comprobados pero negados sistemáticamente por el Colegio de Abogados y la Corte Suprema. A mediados de 1976, durante la Asamblea General de la OEA realizada en Chile, un grupo de abogados entregó una carta a las delegaciones asistentes denunciando la ola de terror que vivía el país.

El Mercurio y demás prensa permitida eludía informar de cualquier iniciativa de protesta y sólo pequeñas notas en la sección *Chile en el exterior* daban cuenta de las denuncias de organismos internacionales, como la ONU, por la violación de los derechos humanos en el país. Luego, en sus editoriales, los mismos medios se encargaban de descalificar las denuncias como mentiras del comunismo internacional por la histórica derrota sufrida en nuestro territorio.

La participación de civiles en altas funciones de gobierno y mandos medios estaba asociada a una absoluta obsecuencia. Críticos de esta condición, sensibles al dolor provocado por los abusos y conscientes de que la dictadura había llegado para quedarse por largo tiempo, muchos civiles que habían apoyado el golpe y

Una de las primeras manifestaciones de quienes exigían conocer el destino de sus parientes detenidos y desaparecidos.

participaban en organismos de gobierno comenzaron a distanciarse del régimen. Entre ellos también algunos profesionales del PDC.

En la segunda mitad de los setenta, al interior de la Junta Militar estallaron luchas de poder

relacionadas con disensos entre civiles de distinto signo ideológico y con una polémica sobre los límites del período dictatorial.

Las circunstancias del plebiscito de 1980 manipulado por Pinochet y sus apoyos civiles dejaron ver cómo el régimen se había enajenado del apoyo de sectores sociales que ahora pedían retorno a la democracia. Fue un tiempo en que la dictadura acentuó la acción de sus organismos represivos.

El asesinato del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, y las oscuras circunstancias de la muerte de Eduardo Frei —hoy bastante esclarecidas como otro crimen del régimen—, en 1982, retardaron la cristalización de un movimiento de protesta contra la dictadura por el retorno a la democracia y la defensa de los derechos humanos que tomó real fuerza social y política a mediados de 1983.

Los sectores civiles que apoyaban incondicionalmente al régimen militar se sintieron minoría y el debate de los mecanismos institucionales para perpetuar su poder y eludir el retorno a la democracia copó las obsesiones de sus líderes



Supieron lo que quisieron saber

La represión no sólo vistió uniforme. Eso queda claro. Pero en la responsabilidad de los civiles hay formas y matices que dificultan sacar conclusiones.

que competían por ganar la confianza del dictador. En este escenario, la aparición de inéditas formas de resistencia armada generaron nuevas oleadas de represión contra el movimiento social, con acciones selectivas de singular brutalidad por parte de los organismos de inteligencia. El degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en 1985, y la denominada *Matanza de Corpus Christi*, en 1987, pasaron a la historia como páginas horrosas de la represión.

Fue también el período en que medios de comunicación opositores lograron vencer la censura publicando denuncias documentadas de las violaciones a los derechos humanos y, pese a la persecución que sufrieron, consiguieron multiplicar las voces silenciadas de las víctimas y sus familiares.

En definitiva, en esos años se fue dibujando una mayoría civil que tuvo entre sus referentes a los partidos democráticos que establecieron una alianza para enfrentar el anunciado plebiscito de 1988.



Una de las primeras responsabilidades de quienes quisieron mantener el silencio de sus parientes, desconocidos y desconocidas.

No es simple distinguir entre aquellas conductas de civiles que pudieron ser consideradas de complicidad con actos criminales y las que respondieron a una función política o de agentes ideológicos de la dictadura.

No es similar la responsabilidad de los que participaron en la planificación de crímenes y los ejecutaron, a la de quienes continuaron defendiendo al régimen militar pese a las evidencias que lo involucraban en delitos de lesa humanidad.

Hubo grados distintos de involucramiento y diferentes tipos de complicidad más o menos activas.

Hubo sectores importantes de la sociedad que siempre tuvieron una información parcial y sesgada de lo que ocurría en el país. Y, por otro lado, la manipulación del miedo fue uno de los factores que impactó en conductas aberrantes. Incluso muchos de los que incurrieron en ellas pueden exponer motivaciones particulares que les permitan explicar lo injustificable. ¿O todos los que torturaron y mataron obedecieron a un mismo tipo de psicopatía o enfermedad?

EL DEBATE DE LAS RESPONSABILIDADES ES COMPLEJO PERO NECESARIO. NO ES COMPARABLE EL CASO DE LA POBLACIÓN QUE TUVO QUE GUARDAR SILENCIO PARA SOBREVIVIR, AL DE QUIENES VIVIERON SATISFECHOS Y SACANDO PROVECHO CONSCIENTE DEL SILENCIO FRENTE A LOS CRÍMENES.

Esos mecanismos de manipulación operados desde un poder dictatorial tuvieron efectos diversos de disociación a nivel social y, por cierto, hubo por mucho tiempo sectores convencidos de que las denuncias de crímenes de la dictadura eran sólo inventos de los comunistas.

Lo relevante parece ser poder distinguir lo esencial que falta para que los chilenos saquen las conclusiones de una traumática experiencia histórica a la que un grupo interesado de civiles quiere echar tierra bajo el pretexto de no abrir viejas heridas y mirar al futuro como si nada hubiese ocurrido.

Lo que sí resulta impresentable es que quienes ocuparon situaciones de privilegio y poder bajo la dictadura intenten asimilar sus circunstan-

cias a las de cualquier chileno que tuvo que sobrevivir y adecuarse al contexto descrito.

Por otra parte, para muchos civiles por un buen tiempo no hubo condiciones ni tuvo sentido moral ni personal entrar en conflicto por cosas que hicieron otros y les resultó lo más natural, en medio de una sociedad tan dislocada, desentenderse del drama que afligía a tanta gente. Y otros hubo que, simplemente, optaron por vivir satisfechos y sacar provecho consciente de su silencio frente a los crímenes.

El debate es una falacia cuando se elude la verdad. Y lo es que ahora (no en tiempos del dictador), para justificar que no supieron lo que ocurría, quienes fueron funcionarios del régimen militar se escuden en que Pinochet los engañó, que la prensa no informó o que los tribunales de justicia no buscaron la verdad. Eso es tan inconsistente como que, desde su tribuna de candidato presidencial, Joaquín Lavín diga que si hubiera sabido lo que ocurría habría votado No en el plebiscito.

La información de lo que en el país ocurría estuvo disponible. No se necesitaba conocer



todos los entretelones y pormenores de las atrocidades develadas en el último tiempo para saber que se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Sin embargo, hubo siempre un sector significativo de los civiles que sólo supo lo que quiso saber y que incluso cuando se conoció el informe Rettig continuó negando la realidad.

Por cierto que a mayor cercanía e información, mayor es la posibilidad de vuelcos drásticos en las percepciones y convicciones. Le sucedió, por ejemplo, al juez Juan Guzmán Tapia cuando conoció los casos de detenidos desaparecidos. Y a Miguel Luis Amunátegui, integrante de la Comisión Valech, al escuchar algunos testimonios de torturados. Pero la radicalidad de la visión de ellos a partir de las nuevas circunstancias no quita que ambos, como hombres de derecho y con posibilidad social de informarse, hubieran podido tener una opinión anterior propia y crítica respecto de las violaciones a los derechos humanos en el país.

Evidentemente entre los civiles que apoyaron la dictadura y que tuvieron roles relevantes en la sociedad (como fue el caso, entre muchos

otros, de Joaquín Lavín, economista, master en Chicago, editor de *El Mercurio*, autor de *La Revolución Silenciosa* y dirigente de la UDI), abundaron más los agentes ideológicos, administrativos y técnicos que los autores y cómplices de actos criminales.

Lo que las Fuerzas Armadas han avanzado en términos de recuperación de la verdad histórica, un sector importante de la civilidad lo continúa eludiendo. Y a ello ha hecho explícita y abundante alusión el comandante en jefe del Ejército general Juan Emilio Cheyre.

Después de conocer el Informe Rettig, en marzo de 1991, el líder del gremialismo UDI Jaime Guzmán respondía en una entrevista a *El Mercurio*: "*La historia demuestra que en ambientes de guerra o climas bélicos no se respetan ni siquiera las normas establecidas para humanizar la guerra*". Y luego, deslindando cualquier responsabilidad por su participación en el golpe, agregaba: "*Con la misma claridad que afirmo que las transgresiones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1974 son de responsabilidad de la UP, las sucedidas entre 1975 y 1977 son de la DINA*". Revelaba que

luego de conocer de las atrocidades que se cometían reflexionó sobre si permanecer o no en el gobierno militar, y que lo hizo *"ante Dios, pero mi deber moral era permanecer para colaborar en el proceso de normalización institucional"*. Y concluía soberbiamente: *"En mi conducta no hay nada reprochable, ni por acción ni por omisión"*.

Algo diferente fue la versión del ex ministro de la dictadura Gonzalo Vial, que participó en la Comisión Rettig: *"Todos los civiles que estuvimos con Pinochet no tuvimos el carácter suficiente para parar las cosas que nosotros sabíamos que estaban pasando. No lo sabíamos con el detalle que se sabe ahora, pero sabíamos que se estaba abusando"*. *"Todo el mundo se disculpa ahora. Yo tuve una discusión terrible en público con Jaime Guzmán, él sostenía que era inútil hacer nada público, sino que se debía trabajar desde dentro"*.

Todos esos civiles conspicuos, y otros mucho más anónimos, supieron lo que quisieron saber sobre las violaciones a los derechos humanos en tiempos de Pinochet. Pero la conversación abierta que requiere la sociedad chilena para

sanar sus heridas sigue siendo esquivada por quienes niegan sus responsabilidades en el drama vivido. Ni la gran prensa, ni el poder judicial ni los civiles que sostuvieron a Pinochet hasta el final lo han hecho.



El ejército ha sido capaz de ir mucho más lejos que la derecha en su reconocimiento de su papel en la dictadura. En la foto, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín.

Los civiles (la derecha) en la represión

Felipe Agüero¹



EL AUTOR ANALIZA EL PAPEL QUE DESEMPEÑARON LOS CIVILES EN LA DICTADURA DE PINOCHET, COMPARANDO LA EXPERIENCIA CHILENA CON LA DE OTROS PAÍSES. RESALTA QUE EL RÉGIMEN MILITAR CHILENO TUVO UN CARÁCTER MÁS INSTITUCIONAL QUE OTROS, EN BUENA MEDIDA POR EL APOYO DE LA DERECHA, QUE RESPALDÓ TANTO LAS REFORMAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS COMO LA REPRESIÓN. LOS CIVILES QUE OCUPARON CARGOS DIRIGENTES TIENEN RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DEBE INVESTIGARSE LA LEGAL, MIENTRAS QUE LOS RESTANTES FUERON CÓMPlices.

Cuando en Chile hablamos del régimen de Pinochet, régimen autoritario, o dictadura, sabemos que hablamos de un régimen militar —el que nos rigió desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 hasta la recuperación de la democracia en 1990—. ¿Por qué, entonces, nos preguntamos sobre las responsabilidades de los civiles en la represión que ese régimen ejerció?

Responder esta pregunta requiere detenerse brevemente en la naturaleza de ese régimen, y hacerlo de forma comparada, es decir, en el contexto más amplio de otras dictaduras del siglo recién pasado.

¿Responsabilidades civiles en un régimen militar?

Si se compara el régimen autoritario chileno con otras dictaduras, por ejemplo, en Europa meridional, Europa del este, o África, lo que destaca en primer término es su naturaleza militar. Esta fue, en verdad, una característica de todos los regímenes autoritarios de América del Sur de esa época. Los de Europa del este, en cambio, fueron regímenes dirigidos por partidos, con los militares claramente subordinados a los civiles, a excepción del régimen polaco en su período final. Por eso es que durante la transición hacia formas democráticas de gobierno en esos países, los inculpados y proscritos de participar en el nuevo régimen eran todos civiles, miembros del viejo partido en el poder y que habían trabajado en los órganos de seguridad.

En España, el régimen franquista, aunque contaba con una amplia presencia militar y el propio caudillo Francisco Franco era militar —generalísimo—, estaba básicamente dirigido por civiles. Lo mismo ocurrió en el caso del régimen corporativo portugués, hasta que

fue derrocado por los militares en 1974, iniciando un período turbulento desde el que se dio partida a la transición a la democracia. El régimen dictatorial griego, llamado de los coroneles, fue una excepción en esa región, pues estuvo dominado y dirigido por militares. En tanto, en África, la mayoría de los regímenes no democráticos fueron personalistas, dominados por un individuo carismático o líder de un grupo étnico, más que por una organización partidista o militar.

Queda claro, entonces, que un rasgo distintivo de los regímenes autoritarios latinoamericanos fue su carácter militar. Esto no quiere decir que otras fuerzas y organizaciones no hayan participado en su gestación y ejercicio. Pero sí significa que la decisión de realizar un golpe de Estado fue tomada por los militares como institución, y que las decisiones principales del régimen eran también tomadas por las fuerzas armadas o requerían ser refrendadas por ellas.

UN RASGO DISTINTIVO DE LOS REGÍMENES AUTORITARIOS LATINOAMERICANOS FUE SU CARÁCTER MILITAR. ESTO NO QUIERE DECIR QUE OTRAS FUERZAS Y ORGANIZACIONES NO HAYAN PARTICIPADO EN SU GESTACIÓN Y EJERCICIO.

¹ Doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Miami, autor de "Las fuerzas armadas y las memorias de la represión en el Cono Sur", en *Memorias militares sobre la represión en el Cono Sur: visiones en disputa en dictadura y democracia* (eds. Eric Hershberg y Felipe Agüero, 2005) y de *Soldiers, Civilians, and Democracy: Post-Franco Spain in Comparative Perspective* (Johns Hopkins University Press, 1995).



Por ejemplo, el régimen militar uruguayo contaba con un gran número de civiles a cargo de los ministerios, pero las decisiones últimas eran tomadas por los consejos de generales y almirantes, y otros consejos consultivos constituidos únicamente por militares. En Perú, los gabinetes fueron predominantemente militares, especialmente en el período de Velasco Alvarado, aunque muchos civiles participaron como prominentes técnicos en distintas reparticiones. En Argentina, aunque numerosos civiles colaboraban desde cargos ministeriales, el poder último residía en la Junta Militar y los consejos de generales y almirantes, y los distintos sectores de la administración pública estaban repartidos entre las ramas de las fuerzas armadas.

El régimen brasileño fue más complejo, pues mantuvo un Congreso electo, aunque con severas restricciones, así como un colegio electoral, en el que participaban partidos y representantes de los estados. Pero mediante las disposiciones contenidas en las actas constitucionales, el poder residía firmemente en el Presidente —un general de Ejército— especialmente después de las turbulencias iniciales que en-

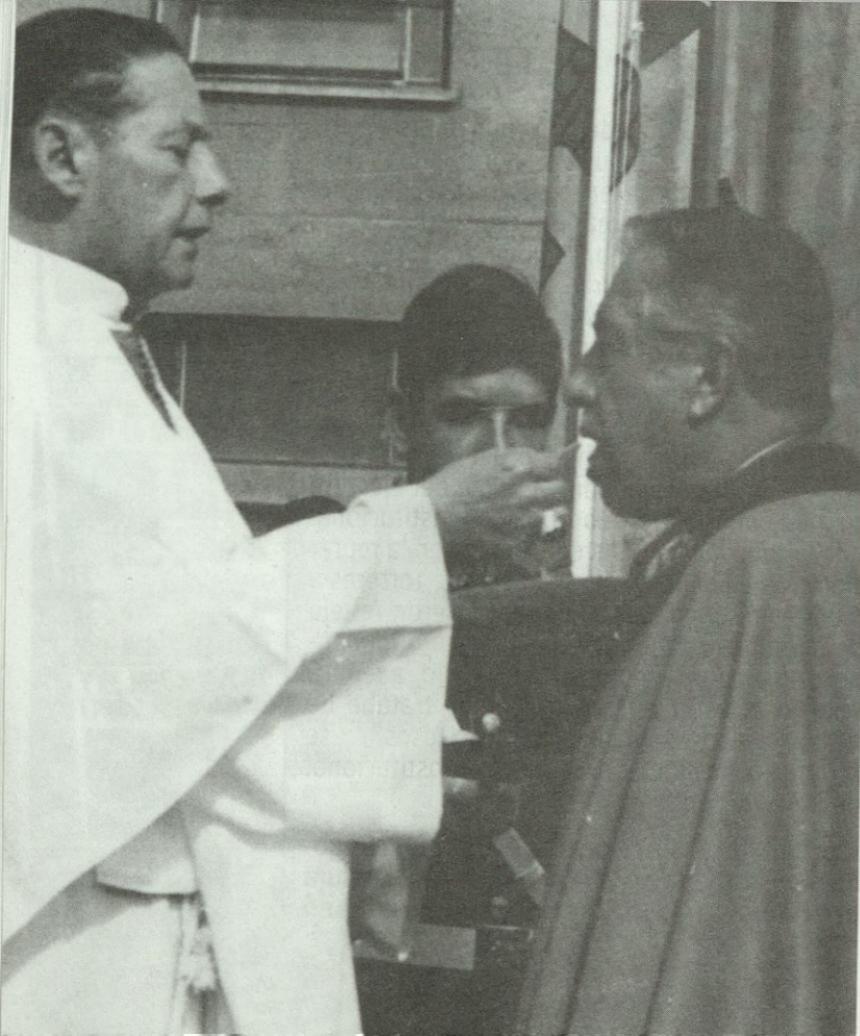
frentaron a militares contra militares. El Presidente era acompañado por un alto número de ministros militares, que se mantuvieron incluso después de la elección de un civil como Jefe del Estado en 1985.

En Chile, el régimen de Pinochet fue, también, indiscutiblemente militar. Aunque, con el tiempo, los principales ministerios pasaron a ser dirigidos por civiles, las decisiones permanecieron fuertemente en manos militares. Las leyes eran aprobadas por la Junta Militar, así como lo fue la Constitución de 1980. La administración del Estado, a través de intendentes y gobernadores, era principalmente militar. El Presidente, que era también el comandante en jefe del Ejército —un rasgo distintivo del régimen chileno— se asesoraba por distintos organismos militares y grupos de oficiales del Ejército implantados en dos ministerios, la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General de Gobierno. Los principales órganos de inteligencia y represivos estaban enquistados dentro de las ramas de las fuerzas armadas y el órgano represor principal del Estado, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y después

la Central Nacional de Informaciones (CNI), eran dirigidos y compuestos por militares. Los civiles que actuaron en estos organismos tuvieron, en general, tareas operativas (por ejemplo, agentes en terreno, soplones, médicos que participaban en torturas e infiltrados en las organizaciones políticas, sociales, instituciones y empresas) y administrativas.

Es esta realidad de un gobierno de las fuerzas armadas la que, en su dimensión represiva, fue recogida en el planteamiento del general Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército, cuando admitió la responsabilidad institucional que le cupo a esta rama uniformada en la represión. Las evidencias de detenciones, torturas y muertes diseminadas por el país fueron reflejo de la amplia participación militar en el gobierno y sus labores represivas. Con ello, además, se dejó atrás la versión de que se trataba de hechos aislados, solamente de "excesos", y se reconoció el carácter sistemático e institucional de la represión.

Muchas veces observadores y analistas de gobiernos autoritarios atribuyeron a la dictadura de Pinochet el carácter de un régimen



personalista. El gran poder que concentró Pinochet en sus manos, su ascendencia primero en el Ejército (después de su consolidación mostrando ser el más duro con los derrotados y de la muerte o salida de la institución de quienes podían encarnar un camino diferente) y después en todas las ramas de las fuerzas armadas (proceso marcado por la salida en 1978 del general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea), y su permanencia en la jefatura del régimen durante toda la duración de éste, pudieron dar pie a tal idea —reforzada por su propia imagen de que “aquí no se mueve una hoja” sin que él lo hubiere ordenado—. Pero el hecho es que Pinochet gobernó siempre acompañado de una máquina organizacional, las fuerzas armadas, y dentro de parámetros que limitaban su poder y lo ceñían al de la Junta Militar de gobierno.

Bien, con todo este énfasis en la naturaleza militar del régimen, ¿a qué viene, entonces, hablar de responsabilidades civiles en la represión? Conviene, para seguir acercándonos a la respuesta, observar con mayor detenimiento las similitudes entre los regímenes autoritarios de Chile y de Brasil.

Si bien Augusto Pinochet concentró un gran poder personal en sus manos, gobernó con una máquina organizacional, las fuerzas armadas, y también debió ceñirse a parámetros y a la Junta Militar.

Civiles: apoyo, dirección y legitimidad

Los de Chile y Brasil fueron los únicos regímenes autoritarios en América del Sur que consiguieron algún nivel de institucionalización, es decir, cierta claridad en sus reglas internas, que otorgaban un grado de capacidad de predicción a los actores involucrados respecto de funciones y procedimientos. Fueron éstos los únicos regímenes que consiguieron aprobar una Constitución y que pudieron entregar reglas más o menos claras para la sucesión en el poder, más allá de cuán arbitrarias pudieran ser. Mientras en los otros casos la jefatura del gobierno era arrebatada entre los militares por golpes dentro del golpe, en Brasil los presidentes tenían un período fijo de cinco años de gobierno, y en Chile la cuestión se resolvió entregando la presidencia a Pinochet para toda la duración del régimen, aunque inicialmente iba a ser rotativa. Todo esto les dio una mayor estabilidad relativa, cierta cohesión interna y, sobre todo, les permitió enfrentar la transición desde una posición de mayor poder, con más resortes para influir en la agenda y sobre sus adversarios políticos.

LA JEFATURA DEL GOBIERNO SE RESOLVIÓ EN CHILE ENTREGANDO LA PRESIDENCIA A PINOCHET PARA TODA LA DURACIÓN DEL RÉGIMEN, AUNQUE INICIALMENTE IBA A SER ROTATIVA.

Diversas razones ayudan a explicar por qué estos regímenes lograron cierto nivel de institucionalización mientras que otros no pudieron hacerlo, pero no podemos detenernos en eso aquí. Baste decir que, en buena medida, esa institucionalización fue el resultado del apoyo y colaboración organizada de importantes fuerzas civiles. En Brasil había un partido oficial, creado por disposiciones del régimen y que reagrupaba a diversos sectores de las elites sociales y económicas. Este partido recibía el apoyo del régimen mediante la promulgación de reglas que le permitían ser el partido mayoritario y gozar de las granjerías del poder oficial, a cambio de una legitimidad y el manejo obsecuente de la administración a nivel federal y estatal. Estas características del régimen expresaban políticamente una poderosa alianza entre las elites sociales y económicas, tec-



nócratas y militares. En otros casos no existía tal alianza o no fue posible organizarla políticamente de modo coherente.

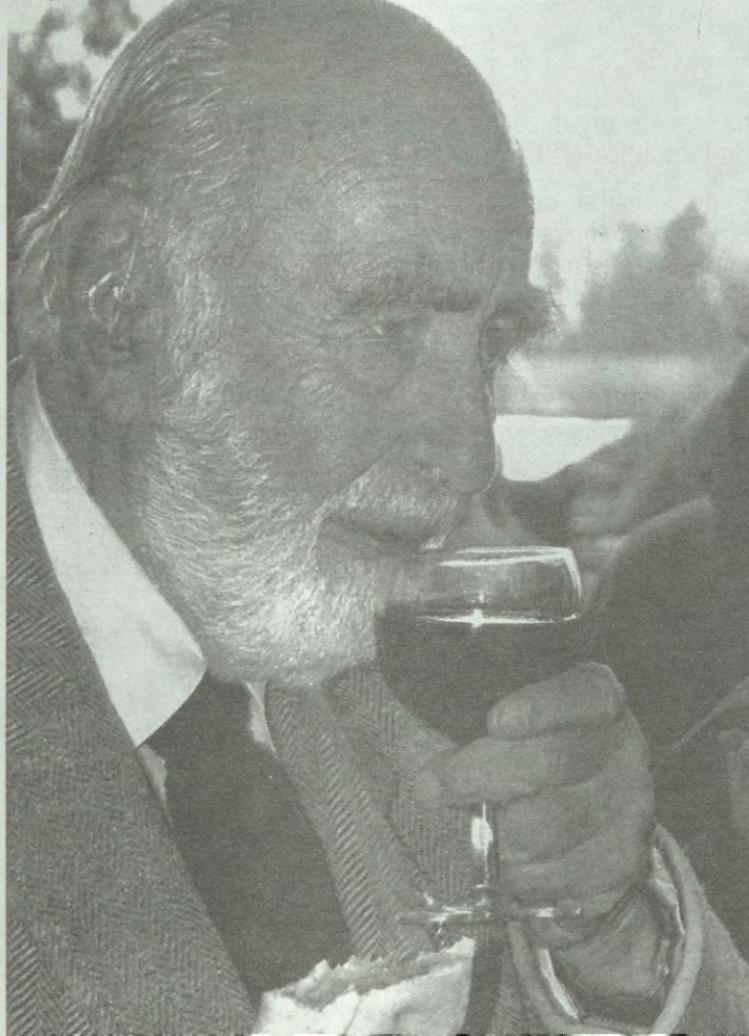
En Chile, la institucionalización fue facilitada por el apoyo irrestricto con que el régimen contó desde las fuerzas de la derecha que incitaron el golpe de Estado. Recordemos que, si bien todos los partidos fueron proscritos, la derecha, agrupada entonces en el Partido Nacional, bajo el liderazgo de Sergio Onofre Jarpa, decidió autodisolverse apenas producido el golpe, pues concluyó que sus objetivos ya se habían cumplido y querían dejar al nuevo régimen en completa libertad de acción. Ese apoyo era la culminación de una amplia y prolongada movilización de los grupos opositores al gobierno del Presidente Salvador Allende, que incluían la alianza política cuya dinámica golpista la aportaba el Partido Nacional, y los dirigentes de las asociaciones empresariales y gremiales. Esas fuerzas expresaban el reciclaje y recombinación, en el contexto de extrema polarización política durante el gobierno de la Unidad Popular, de fuerzas políticas y sociales de larga data, a su vez expresión de los altos

niveles de organización e institucionalización de la política en Chile.

El golpe militar de 1973 y la forma de ejercer el poder al comienzo del nuevo régimen revelaron a las fuerzas armadas como un poderoso y relativamente autónomo actor político. Diversas fuerzas de la política y la sociedad civil establecieron con ellas una alianza de hecho para lograr una reorganización autori-



La institucionalización de la dictadura se facilitó por el apoyo irrestricto de la derecha. En la página 32, los ex ministros Jaime del Valle, Sergio Onofre Jarpa y Hugo Rosende; en esta página, Jarpa, Patricio Carvajal y Modesto Collados.



taria del sistema político, que excluyera los sectores de izquierda que habían apoyado al gobierno derrocado, y la adopción de un nuevo modelo de desarrollo para la modernización capitalista. Las grandes asociaciones de empresarios industriales y agrícolas, las organizaciones profesionales y gremiales, los medios de comunicación que habían alentado el derrocamiento de Allende, principalmente *El Mercurio*, grupos de tecnócratas con alta formación profesional, en especial en materia económica, las elites políticas que promovieron el golpe básicamente desde el Partido Nacional, y la gran mayoría de los miembros del Poder Judicial, encabezados por la propia Corte Suprema, prestaron su apoyo desde sus capacidades específicas. Inicialmente, la Democracia Cristiana apoyó el golpe o al menos lo justificó y algunos de sus cuadros desempeñaron funciones en el régimen, mientras que un grupo minoritario de dirigentes del partido lo condenó.

Desde esos sectores se proveyó el personal necesario para las funciones de gobierno en los distintos niveles y se entregó apoyo legal y mediático. Desde temprano, personas de estos

La derecha, sectores de la sociedad civil y los militares establecieron una alianza para una reorganización autoritaria del sistema político y un nuevo modelo capitalista. En la foto, Agustín Edwards, propietario del diario *El Mercurio*, que alentó el derrocamiento de Allende.

sectores fueron seleccionados para trabajar en la preparación de un anteproyecto de Constitución, y para la conformación más tarde de un Consejo de Estado, del que saldría refrendado el proyecto para la Constitución de 1980. Se formaron y reorientaron organizaciones civiles de apoyo (como CEMA Chile o las Damas de Rojo, bajo el alero de Lucía Hiriart de Pinochet) y, más tarde, para llenar los cargos en las alcaldías en un nuevo marco de descentralización, desde los cuales se crearon las conexiones sociales de base de lo que sería la futura Unión Demócrata Independiente (UDI).

Los civiles entregaron, de esta forma, apoyo al gobierno, y le otorgaron liderazgo y dirección en las áreas clave de reforma institucional y económica, principales pilares de la acción de gobierno. Pero la represión también fue parte de la columna vertebral del régimen. Esta área estuvo en su mayor parte bajo el control de los militares y carabineros, aunque prominentes civiles fueron ávidos y entusiastas colaboradores.

Como en todo régimen autoritario, la represión consistió en restringir o suprimir las libertades: de asociación, de expresión, de movimiento, de

LA COMPLICIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMO *EL MERCURIO* Y *LA SEGUNDA*, FUE ESPECIALMENTE VISIBLE. ESTOS FUERON UNA SUERTE DE ANIMADORES DE LA BARRA DEL GOBIERNO EN TODAS LAS ÁREAS DE LA REPRESIÓN.

pensamiento y otras. La censura, la delación, el control social para asegurar el fiel cumplimiento de esas restricciones, todas esas fueron áreas en las que participaron numerosos civiles en empresas, oficinas, medios de prensa, colegios, universidades y barrios. Hará falta que los historiadores, los existentes pero especialmente los de las nuevas generaciones, indaguen de manera exhaustiva en la reconstrucción de la atmósfera opresiva en la vida cotidiana bajo la dictadura y las formas en que se manifestó esta participación civil.

Naturalmente, la complicidad de los medios de comunicación, como *El Mercurio* y *La Segunda*, fue especialmente visible. Estos fueron una suerte de animadores de la barra del gobierno en todas las áreas de la represión. No solo

El ex dictador Augusto Pinochet acompañado por su ministro del Interior, Sergio Fernández.



dejaron de investigar o denunciar donde correspondía, sino también se sumaron a las campañas de desinformación, agregando al encubrimiento de los crímenes la crueldad y el mal gusto, como en el ya célebre titular "Exterminados como Ratas" aparecido en *La Segunda*. Allí se atribuía a los propios "extremistas" el asesinato de centenares de opositores que fueron en verdad muertos por agentes del gobierno.

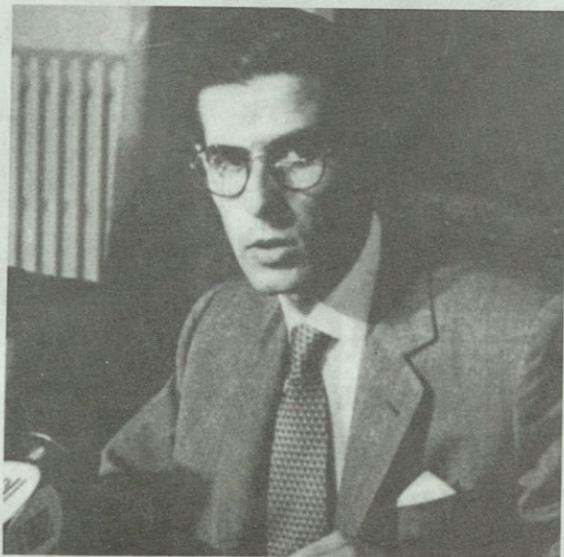
También visible por la inacción, ya ampliamente documentada, fue el poder judicial. En frente de asesinatos, desaparecimientos y torturas, los jueces callaban y no cumplían su misión. Algunos sí hablaban, como el presidente de la Corte Supre-

ma, Israel Bórquez, aunque sólo para decir que los desaparecidos lo tenían "curco". También quiso hablar Bórquez al país, en 1982, pidiendo cadena nacional de televisión, ¿para denunciar los crímenes contra la humanidad que se cometían bajo sus narices y que él tenía la obligación de castigar? No, era solo para expresar su indignación por la forma en que se trataba una detención con que la prensa se divertía en el caso que se conoció como el "sicópata de Viña del Mar".

Menos visible, pero no menos importante, fue la acción de civiles en barrios, empresas y lugares de trabajo, en colegios y universidades. En estas últimas, solo por razones ideológicas fueron echados profesores y personal de apoyo, a veces entregados directamente a los agentes de seguridad. Por ejemplo, el senador de la UDI, Carlos Bombal, cuando se desempeñó en 1974-1976 como secretario del rector en la Universidad Católica, proporcionó información a agentes de la DINA sobre un profesor, el que fue detenido y que no volvió a aparecer con vida. Después, como alcalde de Santiago nombrado por Pinochet, Bombal quiso también dic-



tar sobre los gustos estéticos que creía aptos para los santiaguinos, por ejemplo al hacer retirar una escultura de la acera frente al Museo Nacional de Bellas Artes, en contra de los arreglos que su directora Nena Ossa dispuso para una exposición. ¿Se trataba de una escultura ofensiva para su sensibilidad católica, o era un símbolo político directo de oposición? No, simplemente no le gustó la representación en metal que se hacía de una silla de playa.



Francisco Javier Cuadra, ex ministro de la dictadura, debió dimitir a su cargo de rector de la Universidad Diego Portales después que lo pidieran académicos y estudiantes.

LA REPRESIÓN FUE EJECUTADA POR LAS FUERZAS ARMADAS, POLICÍAS Y APARATOS DE SEGURIDAD, MIENTRAS QUE FUERON CIVILES QUIENES NEGARON Y/O ENCUBRIERON LOS HECHOS. ENTRE ELLOS, SERGIO FERNÁNDEZ, SERGIO DIEZ Y FRANCISCO JAVIER CUADRA.

Pero la represión en Chile fue mucho más allá de la supresión de las libertades señaladas arriba. La represión incluyó el apresamiento masivo, la tortura sistemática, el asesinato y la desaparición de cadáveres, su desentierro y lanzamiento a ríos, cordilleras y el mar, el degüello, quemar vivos a opositores en la vía pública, el destierro, la relegación, el terrorismo internacional de Estado, como el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert y el primer atentado terrorista en la ciudad de Washington, que cobró la vida del ex ministro Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit. De más está señalar que nunca antes en la historia de Chile había ocurrido esto; jamás antes se persiguió a ex ministros y ex jefes mi-

litares en el extranjero hasta darles muerte con explosivos, nunca antes se detuvo, torturó y mató por parte del Estado en esta forma.

Esas actividades estuvieron principalmente a cargo de militares. Pero fueron civiles quienes las encubrieron y las negaron y las refutaron diciendo, por ejemplo, como lo hizo el ministro del Interior Sergio Fernández, hoy senador de la UDI, desde los cargos oficiales que ocupó, que si había gente que desaparecía se debía a que eran extremistas que pasaban a la clandestinidad o esposos que se fugaban con sus amantes. Lo mismo que afirmaba Sergio Diez, ex parlamentario del Partido Nacional y actual presidente de Renovación Nacional, en sus discursos como embajador de Pinochet en las Naciones Unidas. También encubría Francisco Javier Cuadra, ministro Secretario General de Gobierno, ex rector de la Universidad Diego Portales,² cuando en 1986 atribuía el horrendo crimen de cuatro opositores, secuestrados desde sus domicilios en horas de toque de queda y asesinados poco después, cometido por agentes del régimen, a la "consecuencia de una purga interna entre sectores marxistas".³

¿Qué responsabilidad?

No todos los regímenes autoritarios en América Latina alcanzaron estos niveles de represión. Chile, en esta materia, quedó situado en las grandes ligas, especialmente con Argentina. Otros casos de atrocidades aun mucho más masivas cometidas por fuerzas de seguridad, como Guatemala y Perú después de la aparición de Sendero Luminoso, fueron experiencias

² Después que los académicos de la Universidad Diego Portales pidieran su dimisión en una carta y grupos de estudiantes se movilizaran en su contra, Cuadra renunció a la rectoría de esta casa de estudios.



³ A fines de octubre de 2005, el juez Hugo Dolmetsch procesó a 14 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los crímenes del periodista y editor internacional de revista *Análisis*, José Carrasco, el profesor Gastón Vidaurrázaga, el publicista Abraham Muskablit y el electricista Felipe Rivera. Según su resolución, estos homicidios fueron cometidos por la CNI en 1986—ordenados por su jefe, el fallecido general Humberto Gordon—en venganza por el frustrado atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) contra Augusto Pinochet.

⁴ Por ejemplo, el “pau de arara”, consistente en colgar boca abajo a una persona de una barra puesta entre sus rodillas y brazos, dejando completamente expuesta a su torturador la zona genital y anal.



bastante diferentes en que el Ejército enfrentaba a grupos guerrilleros armados en el campo.

En América del Sur, la similitud de Chile con Brasil que se señaló anteriormente ya no se aplica en este terreno. Brasil desarrolló un enorme aparato de información para la represión e inauguró, como sabemos, formas salvajes de tortura que luego fueron exportadas,⁴ pero la persecución no alcanzó los niveles masivos que alcanzó en Chile y, especialmente en Argentina. En Uruguay, hubo una tasa más alta de apresamientos, y quizá también de tortura, pero no de muertes y desaparecimientos. El caso más comparable en cuanto a magnitud relativa es el de Argentina. Pero existen importantes diferencias respecto de la participación de otros grupos. En Argentina, la iglesia católica fue un fiel aliado de la dictadura y hasta apoyó la represión. Bien sabemos que la iglesia chilena, dirigida por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, constituyó un factor fundamental de contención de la represión que de otra manera habría sido bastante mayor. Y, en Chile, la participación civil de apoyo y legitimidad a la dictadura fue mucho más fuerte, en buena medi-

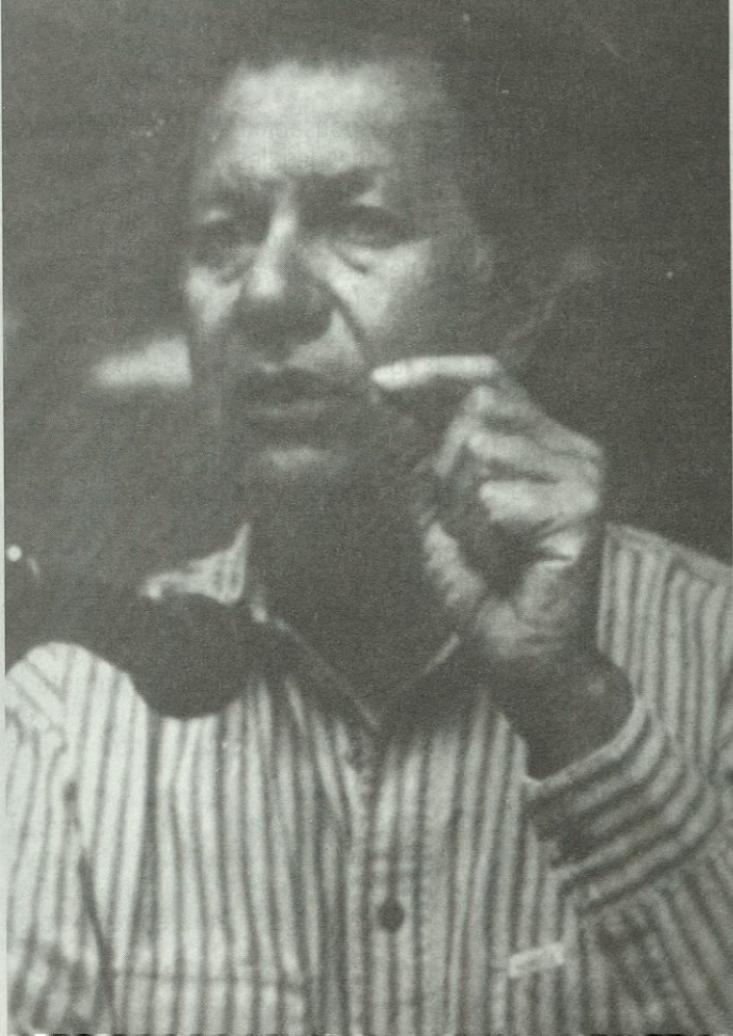
LO MEJOR QUE PUEDE SUPONERSE, ENTONCES, ES QUE PREFIRIERON IGNORAR LO QUE OCURRÍA. PERO MÁS REALISTA ES SUPONER QUE LO SABÍAN Y LO CONSIDERABAN NECESARIO, SI NO DESEABLE.

da como resultado de la acción de la derecha políticamente organizada en la gestación del golpe y el posterior traspaso de esas lealtades al régimen militar.

Hemos analizado que los civiles jugaron un papel central en el impulso a las transformaciones políticas, institucionales y económicas durante el régimen militar. Y que los militares lo hicieron en el otro pilar, el de la represión, especialmente aquella que violó los derechos más elementales de las personas, como el derecho a la vida e integridad física. Al acompañar los civiles un régimen donde existía esa suerte de división del trabajo, ¿qué responsabilidad les cabe?

Fuera de los casos de civiles que ocuparon los más altos cargos de responsabilidad política en la conducción del gobierno, y que por esa ra-

El entonces ministro Cuadra habría ordenado detener al dirigente opositor Ricardo Lagos para "salvar su vida" porque podía estar ordenando una venganza después del atentado contra Pinochet.



⁵ Acogiendo una solicitud de los querellantes, el juez Hugo Dolmetsch ordenó a la policía civil determinar quiénes integraban el comité político asesor de Pinochet en 1986, al momento del atentado contra el ex dictador, recoger la información que publicó la prensa en esos días y las declaraciones públicas de las autoridades acerca de los cuatro homicidios, para después citar a declarar a Cuadra. En la lista de quienes deberán declarar al juez por este caso se encuentran: el ex ministro del Interior, Ricardo García; el ex subsecretario y actual diputado, Alberto Cardemil; el ex canciller Jaime del Valle; el ex Secretario General de la Presidencia, Sergio Valenzuela; el ex director de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), Marcelo Venegas Palacios; el ex jefe de la guarnición de Santiago, general (R) Oscar Ojeda; el ex subdirector de Carabineros, general (R) Oscar Torres, y el ex director de Investigaciones, general (R) Fernando Paredes.

zón tuvieron responsabilidad sobre detenidos, cuyas implicaciones legales deben investigarse, el resto del personal civil fue cómplice.

Esos civiles han negado tal complicidad aduciendo razones de ignorancia. Que "no sabían lo que ocurría". Esto no es posible ni creíble, pues lo que ocurría se lo hacían ver con toda claridad: la iglesia a través de sus personeros más altos y sus órganos de investigación; los miles de recursos de amparo que se presentaban en tribunales, prácticamente todos denegados; los informes periódicos de organismos internacionales, como la ONU y la propia Organización de Estados Americanos (OEA); órganos internacionales de derechos humanos; la prensa internacional; gobiernos extranjeros a través de emisarios especiales, especialmente de Europa, y de Estados Unidos durante la administración del Presidente Jimmy Carter, aparte de muchas otras fuentes dentro y fuera de Chile.

Francisco Javier Cuadra sabía que los crímenes antes mencionados eran asesinatos por agentes del gobierno del que él era ministro, y no el resultado "de una purga interna entre sectores

marxistas", como dijo entonces. Que lo sabía se desprende del reconocimiento reciente que ha hecho sobre que con esos crímenes "podía estar llevándose un acto de venganza" por parte de agentes de seguridad del gobierno del cual era vocero, por lo que había decretado el apresamiento del entonces dirigente opositor y hoy Presidente de la República Ricardo Lagos y otros, para salvarles la vida. Entonces, ¿cómo es la cuestión, sabía o no sabía?⁵ Claramente, desde el comienzo, el argumento de la ignorancia hizo agua por todos lados.

Lo sabían porque estaban en y con el gobierno, y adicionalmente, porque todas esas fuentes se lo hacían ver reiteradamente. Lo mejor que puede suponerse, entonces, es que prefirieron ignorar lo que ocurría. Pero más realista es suponer que lo sabían y lo consideraban necesario, si no deseable.

Sin embargo, insisten en el argumento de la ignorancia. Que "si sólo hubiesen sabido". Y, lo que es todavía peor, sólo una vez conocidos los delitos de corrupción derivados de la información del Banco Riggs, señalan que si hubiesen sabido eso, no habrían votado por el Sí en

el plebiscito de 1988. Esa insistencia es lamentable, porque revela una negativa a confrontar y admitir frente al país su propia complicidad. Pero aunque no quisiera reconocerse eso, aún si alegan ignorancia, podrían al menos expresar una actitud abierta de rechazo a su participación de un gobierno que cometió esas atrocidades.

Nada de eso han hecho, y arrogantemente dicen que no lo harán. Carlos Bombal, Julio Dittborn, Jovino Novoa, Sergio Diez, Sergio Fernández, y tantos otros, para mencionar solo algunos de los que continúan teniendo alto protagonismo político. Al no hacerlo y al sostener que la violencia venía siendo alentada por otros sectores, parecen querer admitir que esa represión, del modo que se ejerció, fue necesaria.

Al no hacerlo, han dejado solos a quienes sí dieron el paso de enfrentar su responsabilidad, como el Ejército. De esa manera, el Ejército ha podido avanzar en replantearse efectivamente como el Ejército de todos los chilenos, un paso necesario para su pleno desempeño profesional. Este paso indispensable para el futuro de sus propias aspiraciones políticas, para asen-

tar una sociedad en que prime el consenso acerca de la inviolabilidad de los derechos humanos, para la solidez de nuestra democracia y nuestro proyecto como país basado en funda-



Hernán Büchi jura como ministro del régimen militar.

SE DICE, COMO QUERIENDO EMPUJAR RAPIDITO EL POLVO BAJO LA ALFOMBRA, QUE YA ES TIEMPO DE PONER LA VISTA HACIA EL FUTURO. QUE YA NO PODEMOS SEGUIR ATADOS AL PASADO. ESTA ES UNA DISYUNTIVA FALSA QUE PLANTEAN QUIENES NO HAN SALDADO SUS CUENTAS CON EL PASADO.

mentos éticos comunes, ese paso no lo han dado los civiles que fueron cómplices de la represión.

Esos sectores civiles alentaron por mucho tiempo el discurso de la necesidad de la reconciliación, pero la entendían como un dar vuelta la página, que los otros olvidaran con rapidez, pero sin ofrecer la admisión de la propia responsabilidad.

Esto revela, además, una falta de realismo. La historia no puede hacerse desaparecer por un acto de voluntad, como no pudieron hacerse desaparecer todos los cuerpos, que porfiadamente emergían de los patios de los cementerios o de las profundidades salinas del desierto, o que el mar devolvía a las playas, ni la memoria de los que todavía no aparecen.

Se dice, como queriendo empujar rapidito el polvo bajo la alfombra, que ya es tiempo de poner la vista hacia el futuro. Que ya no podemos seguir atados al pasado. Esta es una disyuntiva falsa que plantean quienes no han saldado sus cuentas con el pasado. Y es falsa porque la vista puede centrarse mucho mejor y más libremente en el futuro cuando no se desconoce el pasado, cuando sabe que éste se hace parte del futuro.

Nadie nunca pudo enterrar el pasado sin que se transformara en fantasma. Ni Alemania con el holocausto y el propio sufrimiento en la guerra, ni la Francia colaboracionista de Vichy, o el genocidio de los armenios, las atrocidades japonesas en Asia, la esclavitud en Estados Unidos, el Gulag soviético, y más recientemente, las atrocidades en Kosovo y Ruanda. En ninguno de esos lugares puede mirarse el futuro sin el pasado. Y en ninguno de ellos concentrarse en el futuro significa abandonar el pasado.

Tampoco en Chile.

Alegato por el desafuero del senador Sergio Fernández

El 20 de abril de 2005, el abogado Eduardo Contreras, querrelante en varios procesos contra el ex dictador Augusto Pinochet, pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago desaforar al senador Sergio Fernández Fernández "por existir sospechas de tener dicho individuo algún grado de responsabilidad penal, fuere la de autor, cómplice o encubridor, en los ilícitos a que se refiere el proceso denominado Operación Cóndor". Para desaforarlo, expuso Contreras, se requieren "fundadas sospechas", ni siquiera presunciones.

"¿Las hay?" preguntó y respondió. Los siguientes párrafos son una síntesis de su exposición.

El decreto ley N° 228 de 1974 estableció que: "las facultades que la constitución política confiere al Presidente de la República por la declaración del estado de sitio serán ejercidas por la Junta de Gobierno por medio de decretos supremos que serán firmados por el ministro del Interior". Añadía: "el Ministerio del Interior dictará las normas a que deberán someterse las autoridades administrativas respecto a las medidas que hubieren adoptado o adopten en el futuro, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 1° de este decreto ley". Es decir, desde el comienzo del régimen militar, fue precisamente el Ministerio del Interior el conductor y

el responsable de los procedimientos de los aparatos de seguridad.

Recordó el abogado que, siendo Fernández ministro del Interior, se dictó el decreto N° 3.168 (enero 1980) mediante el cual la facultad presidencial de arrestar personas durante el estado de emergencia se delegó a ese ministerio, "es decir, al mismo Fernández".

Posteriormente, Fernández como ministro del Interior y el general César Benavides como ministro de Defensa "crearon mediante el documento secreto del 22 de agosto de 1980 la llamada 'Unidad Antiterrorista', que dependía directamente de Pinochet y que, entre otros crímenes, ejecutó la llamada Operación Albania".

Según el alegato, Fernández firmó la circular que el 25 de mayo de 1978 prohibió a la CNI dar respuestas a los tribunales en el contexto de los recursos de amparo.

“Nadie pide ni da explicaciones”

Por esos mismos días, molesto por la huelga de hambre de los familiares de los detenidos desaparecidos, Fernández dijo a la prensa: “En cualquier guerra la gente desaparece y nadie pide ni nadie da explicaciones”.

Un mes después decía: “Es necesario que el país comprenda que derrotar una subversión violenta y organizada constituye un desafío que ha exigido la acción constante, abnegada y preventiva de los organismos de seguridad en términos que ella no puede ser enjuiciada pretendiendo aplicar criterios propios de una época de normalidad”. Preguntó el abogado Contreras en el alegato: “¿Puede haber una evidencia más clara del manejo de la represión por parte de Fernández...?”.

Contreras entregó en los alegatos copia y traducción de un documento de la CIA sobre una reunión de los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la DINA con los ministros de Defensa e Interior para discutir procedimientos relativos a las detenciones de los opositores y aclarar contradicciones entre los aparatos represivos.

En el proceso existen copias de documentos suscritos por el ministro Fernández, informando que no

estaban detenidas personas que, posteriormente, se estableció en tribunales que habían sido asesinadas. También, del instructivo N° 2.015, “Secreto”, de la DINA, que dispuso el 8 de febrero de 1974 la creación en cada ministerio de una oficina de seguridad, dependiente de cada ministro y que sería enla-ce con la DINA.

Además, hay copia de un oficio del 14 de junio de 1979, del director de la CNI, general Odlanier Mena, en que señala que por expresas órdenes del ministro Fernández, toda información sobre detenidos que requieran los tribunales, “debe ser solicitada a través del Ministerio del Interior”, prohibiéndose expresamente a este organismo proporcionar directamente a los tribunales cualquier información.

Recordó el abogado Contreras que Fernández declaró a mediados de 1978 la disposición del gobierno de explorar caminos sobre casos de detenidos cuyo paradero no se había establecido. Sobre esa base, la iglesia católica le envió antecedentes de 488 casos de víctimas, rogando a Fernández investigar su situación. Hasta ahora no ha respondido. Como no lo hizo, la Vicaría de la Solidaridad publicó en 1979 las fichas de estos casos en los cinco primeros tomos de los libros titulados *¿Dónde están?*

“Todos sabían”

En un caso, el secuestro del ciudadano de origen británico Guillermo Roberto Beausire, una de las víctimas de la Operación Cóndor, Fernández no solo negó su detención, “sino que con inusitada audacia, se permite sostener que los inmuebles de Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y el de Irán con Los Plátanos, ‘no son lugares de detención’, en circunstancias que a esas alturas hasta en la prensa extranjera se denunciaba esos siniestros lugares como centros de torturas de la dictadura de Pinochet”, señaló Contreras.

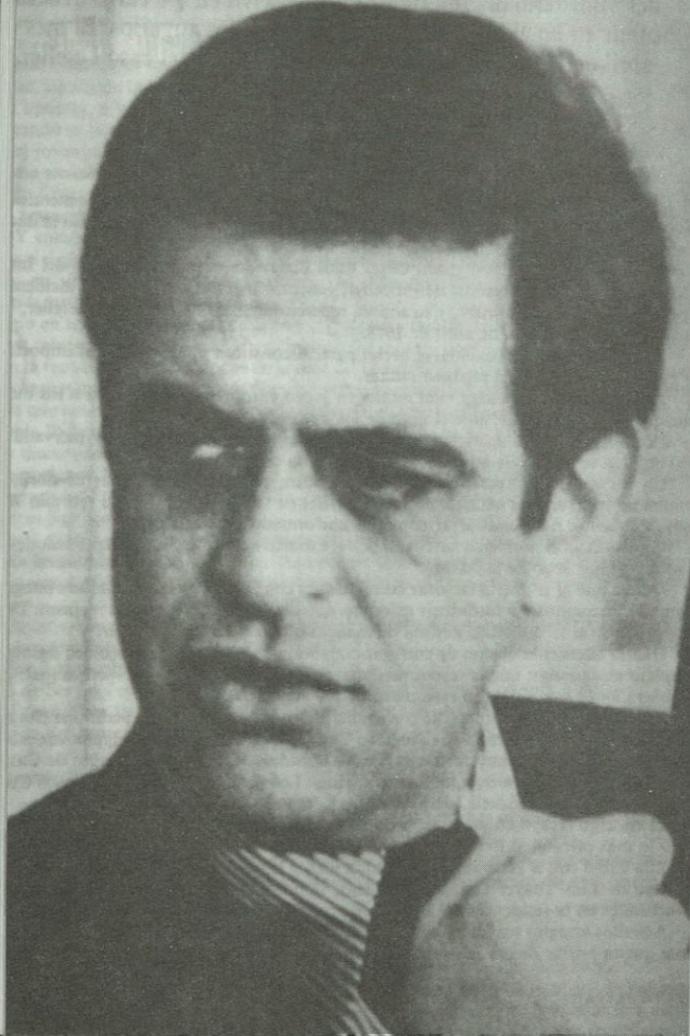
En el caso del actual diputado Carlos Montes, detenido dos años y torturado, en las “pruebas” en su contra se incluyó un testimonio de Juan Maino, un camarada de partido detenido desaparecido. El antecedente lo aportaron los abogados del Ministerio del Interior de la época, subordinados de Fernández, quien siempre negó la detención de Maino. “¿Cómo se las arreglaron los subordinados del ministro Fernández para obtener esa ‘prueba’?”, preguntó el abogado.

El Informe Rettig consigna que cuando Fernández fue ministro del Interior, murieron 142 personas por violaciones a los derechos humanos y desaparecieron otras nueve. Él era ministro cuando la CNI asesinó al dirigente sindical Tucapel Jiménez. Veinticinco detenidos y torturados por la CNI presentaron una querrela incluyendo a Fernández.

“Lo que sostenemos es que hay o coautoría o al menos cooperación dolosa de Fernández para la ejecución de los secuestros calificados. Hay actos simultáneos y hay actos posteriores. Por sus funciones, era imposible que Fernández desconociera el sistema institucionalizado de secuestros que se perpetraba por la dictadura”, afirmó Contreras.

Según señaló a los jueces, “todos sabíamos en Chile y en el extranjero lo que sucedía bajo la dictadura militar. Lo sabían mejor que nadie los funcionarios del régimen, como ha reconocido el propio Sergio Onofre Jarpa, otro ministro civil del Interior, quien dijo a la prensa: ‘Todos intuíamos lo que ocurría’ ”.





"Alguien podrá sostener –ironizó el abogado– que la encargada de aseo de la gobernación de Chaitén en el extremo sur a lo mejor no sabía lo que pasaba, o quizá el junior del Ministerio de Tierras y Colonización. ¡Pero el ministro del Interior, encargado de la seguridad interna del país!".

Fernández era muy cercano a Pinochet, recordó el jurista, al punto que lo nombró Contralor General de la República para que aprobara la consulta contra Naciones Unidas, fue jefe de la asesoría presidencial, del consejo de ministros y encabezó la campaña para deponer al general Gustavo Leigh.

"Lo que Fernández y su defensa han intentado hacer es algo impresentable: sostienen que los malos eran los militares y los buenos los civiles (...) El de Pinochet fue un régimen militar con destacada presencia de civiles".

Añadió que el propio Presidente Ricardo Lagos dijo cinco días después de la petición de desafuero de Fernández: "Todo el mundo sabía que eso ocurría".

Cerró su alegato pidiendo el desafuero de Fernández en nombre de las víctimas de la Operación Cóndor.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del senador por 13 votos contra 11, en un fallo con estrecha mayoría.



GRITEMOS LA VERDAD AL PAPA
SI EN CHILE SE TORTURA!

¿Oportunistas, ingenuos, cómplices o encubridores?

Manuel Salazar¹



EL ANÁLISIS DE LA PRENSA ESCRITA EXISTENTE EN CHILE ENTRE 1973 Y 1977 DEMUESTRA QUE UN ENTRAÑABLE LAZO UNIÓ A SUS DUEÑOS Y RESPONSABLES CON EL RÉGIMEN DE PINOCHET. INCLUSO LOS CRÍMENES MÁS ABOMINABLES PERPETRADOS POR LOS ÓRGANOS REPRISIVOS DE LA DICTADURA RECIBIERON EL RESPALDO EXPLÍCITO, LA JUSTIFICACIÓN Y EL APLAUSO DE ESOS MEDIOS QUE SIGUEN HOY MÁS SÓLIDOS QUE NUNCA.

En la noche del 11 de septiembre de 1973 los teléfonos no paraban de sonar en las casas y departamentos de los barrios acomodados de Santiago. Familiares, amigos y conocidos avisaban que en las primeras horas de la madrugada uno de los canales de televisión transmitiría los videos que habían sido encontrados en la casa de Salvador Allende en la calle Tomás Moro. Se hablaba de orgías en las que aparecían los jefes de la Unidad Popular bebiendo whisky y degustando todo tipo de exquisitices vedadas para el resto de los chilenos.

Desde las terrazas de los edificios más altos de las comunas de Santiago y de Providencia se escuchaban ocasionales disparos acallados de inmediato por el tableteo de las ametralladoras. En algunos barrios de la zona sur de la capital, en

tanto, unos pocos militantes del MIR y del Partido Socialista, enfrentaban con las armas en la mano a fuerzas militares muy superiores.

El golpe de Estado había sido rápido y demoleedor. Los aviones a reacción bombardeando el Palacio de La Moneda hasta incendiarlo por sus cuatro costados no dejaban dudas sobre el ánimo de los conjurados. El Presidente Allende yacía muerto y todos sus principales partidarios estaban detenidos o eran intensamente buscados.

Las radioemisoras transmitían marchas castrenses sólo interrumpidas por la repetición de los bandos e instructivos de la Junta Militar de Gobierno llamando a la población a permanecer en sus casas y a no asomarse a puertas ni ventanas. Cualquier intento de resistencia sería sofocado con poder de fuego terrestre y aéreo.

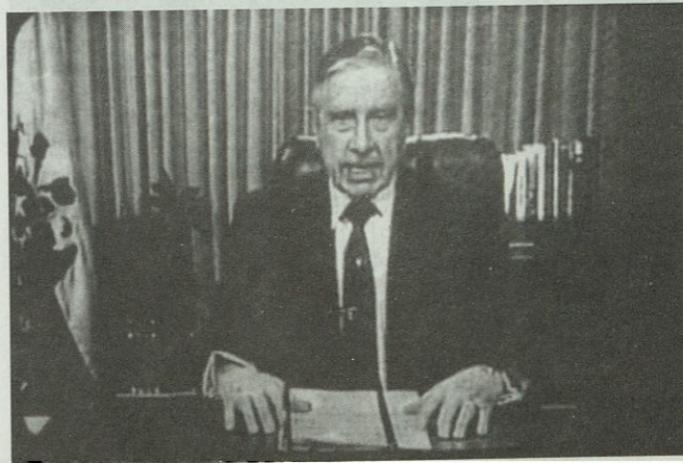
Todos los medios de comunicación partidarios de la Unidad Popular habían sido allanados y destruidos a través de una muy bien planificada "Operación Silencio". Los partidarios de Allende estaban ciegos, sordos y mudos.

En la redacción del diario *El Mercurio*, en el antiguo edificio que se levantaba en la esquina de las

calles Compañía y Morandé, a escasas tres cuadras de La Moneda, se observaban los semblantes satisfechos. René Silva Espejo, su director, revisaba una y otra vez los contenidos de la edición que saldría al día siguiente.

Horas antes, tras el bombardeo de La Moneda, los militares habían solicitado a Silva Espejo la presencia en el palacio de gobierno de dos de sus fotógrafos para que registrasen las consecuencias del ataque. Juan Enrique Lira y Hernán "Cabezón" Farías —editor y jefe de Fotografía, respectivamente— fueron los encargados de cumplir la misión. Lo que ellos captaron ha sido conocido sólo parcialmente hasta hoy.

¹ Manuel Salazar es periodista de la Universidad de Chile. Fue editor de los diarios *La Época* y *La Nación* y ha escrito varios libros de investigación, entre ellos *La historia oculta del régimen militar* (en coautoría) y *Conteras, historia de un intocable*. En esta serie escribió en el N° 6 (Septiembre), el artículo "Las siglas del miedo: DINA y CNI".



Los premiados

El 7 de noviembre de 1973 la agencia de noticias *ORBE*, controlada por el gobierno militar, distribuyó la siguiente información a sus abonados:

"En reunión de prensa, esta mañana, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Enrique Carballo, se refirió a los agregados culturales y de prensa que han aceptado los cargos ofrecidos por el gobierno militar.

Dijo que en Bolivia fue designado y aceptó el cargo el periodista Carlos Aracena; a la embajada chilena en Colombia, como agregado cultural y de prensa se dirigirá el conocido periodista de la revista *Ercilla*, Hernán Millas; a ocupar estas mismas funciones en la sede de Washington, Carmen Puelma; al consulado de Chile en San Francisco de California, Marcelo Maturana; para cumplir estas funciones en las Naciones Unidas, Nueva York, Adolfo Yankelevich; a Guatemala, Raúl González Alfaro; a Inglaterra, Jorge Navarrete, quien hasta hace poco participaba en el programa "A esta hora se

improvisa"; a Francia se dirigirá a ocupar ese cargo María de la Luz Alemparte; a España, Carlos Sánchez Hurtado; a Alemania Federal, Lucía Gevert Parada; a Suecia, el periodista Luciano Vásquez; a Ginebra, Maximiano Errázuriz, ex diputado del Partido Nacional y ex director del periódico *Cóndor* de Curicó; a China viaja Héctor Durán, comentarista de *Radio Agricultura*.

"Por otra parte, se supo extraoficialmente que Mario Carneyro, director del diario *La Segunda*, rechazó el ofrecimiento de agregado cultural y de prensa a la embajada de Chile en México.

"En cuanto a las periodistas Patricia Guzmán y Silvia Pinto, aún no han dado una respuesta definitiva al ofrecimiento para desempeñar los mismos cargos en Holanda y Argentina, respectivamente".

Los militares y la derecha agradecían así los esfuerzos de algunos de los periodistas que se habían destacado "en la lucha contra el marxismo internacional". Sólo uno —Hernán Millas— rechazó el ofrecimiento.

EN NOVIEMBRE DE 1973 LA JUNTA MILITAR DESIGNÓ EN CARGOS EN EMBAJADAS DE LATINOAMÉRICA, CHINA, ESTADOS UNIDOS Y EUROPA A UN SELECTO GRUPO DE PERIODISTAS. ERA EL PREMIO PARA AQUELLOS QUE SE HABÍAN DESTACADO "EN LA LUCHA CONTRA EL MARXISMO INTERNACIONAL".

Plan Zeta

En los preparativos de la guerra psicológica que acompañaría al golpe de Estado, los oficiales de la Academia de Guerra que diseñaron las operaciones en conjunto con asesores civiles, idearon lo que se denominó Plan Zeta, un burdo montaje destinado a justificar la represión y a convencer a las familias de los militares y de los estratos medios de la población, que las dirigencias de la Unidad Popular se aprestaban a asesinar a cientos de personalidades opositoras.

El primer antecedente concreto del Plan Zeta fue una filtración, el día 17 de septiembre de 1973, por parte de los servicios de inteligencia de la Armada, al periodista Julio Arroyo Kuhn, corresponsal en Concepción de los diarios *El Mercurio* y *Las Últimas Noticias*, de una información que fue difundida por la agencia *France Press*, y que en parte señalaba:

"Un plan destinado a decapitar la cúpula militar y eliminar a la oposición al gobierno de Allende, fue descubierto al parecer en los archivos del Palacio Presidencial, se informó en buena fuente".



Reflexiones de un dirigente

Ernesto Carmona, dirigente del Colegio de Periodistas, reflexionó hace algunos meses sobre el papel que cumplieron algunos profesionales de la prensa en aquellos aciagos días:

“Los periodistas cometemos errores. Pero otra cosa es escribir mentiras y levantar calumnias. En *Canal 13* y en *TVN* se hicieron listas negras de gente de izquierda, supuestamente involucradas en el Plan Zeta, un mito CIA vitoreado en libros y artículos de distinguidos periodistas. Algunos aportes fueron *Anatomía de un fracaso* (Zig Zag 1973) de Emilio Filippi y Hernán Millas; *Martes 11, auge y caída de Allende* (Triunfo, 1973), de Abraham Santibáñez, Luis Alvarez Baltierra y Francisco Castillo; entre otros. Fueron textos lamentables, que probablemente avergüenzan a sus autores, pero evocarlos hoy constituye, para algunos, “cacería de brujas” y “justicia popular”.

Carmona fue el editor de *Morir es la Noticia*, un notable trabajo de investigación realizado por 62 periodistas y un colectivo de estudiantes, donde, a través de una semblanza de cada víctima, se rescata del olvido y relata cómo perdie-

ron la vida o fueron desaparecidos 23 periodistas, nueve estudiantes de periodismo, 20 trabajadores de la comunicación (camarógrafos, fotógrafos, cineastas y otros), 28 obreros gráficos y 21 periodistas que fallecieron porque el golpe militar trastornó sus vidas, a causa de los sufrimientos en prisión, maltratos, enfermedades no atendidas, pérdida de la previsión, exilio y otras causas.³

Ernesto Carmona recuerda que “Abraham Santibáñez eligió a *El Mercurio* del 2 de diciembre de 2004 para sostener en una Carta al Director que por sacar a la luz estos trapos sucios del periodismo ‘podríamos estar peligrosamente cerca’ de una ‘justicia popular...), a veces expedita y cruel’. Lamentablemente, el diario nunca publicó la réplica del ex presidente de la Orden, Guillermo Torres, quien cuestionó su argumentación ‘para justificar el que no se cumpla con el deber de analizar en las instancias gremiales adecuadas, el comportamiento de periodistas que faltaron a sus compromisos y se prestaron para graves conductas antiéticas’, recordando, además, que Santibáñez forma parte del Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Periodistas”.

³ Ernesto Carmona es editor de www.Ciap-Felap.org, publicación de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas. Colabora también con la página electrónica www.ARGENPRESS.info.

La generación *Portada*

Un pequeño núcleo de personas tuvo una influencia determinante en la oposición mediática a la Unidad Popular y más tarde en el apoyo al modelo económico impuesto por la dictadura militar. Se convocaron a fines de la década de los 60 por sugerencia de Agustín Edwards para elaborar un programa económico que pudiera poner en práctica Jorge Alessandri si ganaba las elecciones de 1970 y lo encabezaba Emilio Sanfuentes, desde el Centro de Estudios Socioeconómicos, Cesec. Otro grupo fue reunido por el historiador Jaime Eyzaguirre para elaborar una doctrina que pudiera enfrentar al creciente auge de la izquierda en la Universidad Católica de Chile.

Pese a la muerte de Eyzaguirre, quien fue reemplazado por Julio Philippi, muy pronto llegaron a coincidencias claras en la urgencia de levantar un referente ideológico para renovar a la derecha. Entre ellos destacaban figuras que en las décadas siguientes serían determinantes en el manejo de la economía y de los susten-

tos ideológicos del régimen militar, tales como Pablo Baraona, Alvaro Bardón, Hernán Cubillos, Roberto Kelly, Cristián Zegers, Hermógenes Pérez de Arce, Gonzalo Vial, Guillermo Bruna, Jaime Martínez Williams, Ricardo Claro Valdés, Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñán, Hugo Tagle, Fernando Silva Vargas, Mario Urzúa, Víctor Manuel Muñoz, Patricio Prieto y Sergio de Castro, entre otros.

En un comienzo decidieron editar la revista *Portada*, que luego se transformó en la revista *Qué Pasa*, para luego, a fines de los años 70, anidar definitivamente —salvo unos pocos— en la empresa *El Mercurio*, donde varios de ellos son determinantes hasta hoy.

Católicos integristas en su mayoría, ultraliberales en lo económico; "blancos" o "republicanos", pero entusiastas partidarios de Pinochet, se transformaron en los principales captadores de civiles para el régimen militar, acunaron al gremialismo, alentaron a los Chicago Boys y se hicieron los sordos y ciegos frente a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

LA PRENSA ÚNICAMENTE DIFUNDIÓ LA VERSIÓN OFICIAL DE LOS ASESINATOS DE MILITANTES IZQUIERDISTAS. EN ESTE SENTIDO LOS DIARIOS DE LA EMPRESA EL MERCURIO FUERON LOS PRINCIPALES CÓMPlices DE LOS VERDUGOS.

Los duros

En la segunda pista de la misma avenida tomaron posiciones los que se sentían iluminados por los viejos cuños del nacionalismo local y que se disputaron con los anteriores los espacios de influencia en el gobierno militar. Atrincherados en el diario *El Cronista* (*La Nación*), en las columnas de *La Tercera*, en algunas radioemisoras y en diversas reparticiones del gobierno, defendieron a ultranza la gestión del coronel Manuel Contreras al frente de la DINA.

Entre ellos destacaron Alvaro Puga, uno de los primeros en tener a cargo la Dirección Nacional de Comunicación Social, Dinacos; Silvia Pinto, directora de *El Cronista*; Gastón Acuña, Federico Willoughby, Jaime Valdés Valdés, Héctor "Chico" Durán, Rafael Otero, Manuel Fuentes Wedling, Manuel González Valdebenito y Alberto Guerrero.

El 15 de julio de 1975 apareció en Buenos Aires la revista *Lea*, creada especialmente para la ocasión por la editorial Codex, vinculada a la ultraderechista Triple A. Su artículo principal informaba sobre supuestas rencillas internas

entre el MIR chileno las que habrían producido muertes en a lo menos tres países de la región. Dos días después, en Brasil se publicó la revista *O'Día*, donde se entregó una lista de 59 miristas que habrían fallecido en enfrentamientos con la policía argentina.

Ambas publicaciones fueron parte de una operación de inteligencia de la DINA destinada a encubrir el secuestro y posterior asesinato de militantes de izquierda en los meses posteriores al golpe de septiembre de 1973.

El montaje incluyó la difusión de los nombres de 119 personas por las cuales se habían interpuesto recursos de amparo después de haber sido vistas detenidas y bajo torturas en los cuarteles secretos de la DINA en Chile.

La maniobra contó con la colaboración entusiasta de los diarios de Agustín Edwards, además de *La Tercera* y *El Cronista*. El 16 de julio de 1975, en la página 15 del diario de Edwards, bajo el título, "Miristas Muertos en Argentina Eran Buscados en Chile", se lee: "Los dos integrantes del MIR que fueron asesinados la semana pasada cerca de Buenos Aires, figura-

ban como desaparecidos en Chile y entidades humanitarias, entre ellas Amnesty International,



Sergio Reyes Navarrete, militante del MIR. Uno de los 119 detenidos desaparecidos. Imagen extraída del libro 119 de nosotros, Lucía Sepúlveda, LOM Ediciones, 2005.

habían planteado reclamos por ellos, se informó en fuentes de gobierno”, agregando que “los servicios de seguridad comprobaron que está en marcha un plan para hacer falsos secuestros. Según fuentes de Gobierno, elementos marxistas irrumpen en domicilios de españoles, se identifican como personal de seguridad y se llevan a los dueños de casa. Por supuesto —puntualizaron las fuentes— se cuenta con la complicidad de éstos, lo que ignoran los familiares. Estos, lógicamente, concurren a los tribunales a denunciar la desaparición de sus parientes (...) Estos seudo detenidos o secuestrados —explican las fuentes— son trasladados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros, y tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”.

El diario *La Segunda*, en tanto, publicó el 24 de julio de 1975 un titular que está inscrito en la antología de la abyección periodística nacional: “Exterminan Como Ratas a Miristas”. Más tarde, el 29 de julio, el diario que dirigía Mario Carneyro, secundado en la subdirección por Mercedes Garrido, arremetió contra el Comité Pro Paz, entidad que había recurrido de ampa-

ro por las 119 personas incluidas en las listas, llamando la atención pública sobre "la extrema gravedad que encierra que un sector de la prensa nacional retransmita en forma sensacionalista noticias emanadas de un semanario y diario extranjeros, escasamente conocidos, que se refieren a la presunta muerte de un alto número de chilenos en el extranjero, sin señalar fuentes de organismos competentes".

En una crónica firmada por Antonio Salgado, *La Segunda* afirmó que "el comité mencionado se pretende erigir en orientador de la prensa nacional. De señalarle el camino que debe seguir. Olvidando acaso aquella reunión de hace unos meses cuando un alto dignatario de la Iglesia Católica les hizo presente que era necesario disolver ese comité por no ser necesario a estas alturas..."

En *La Tercera* no quisieron ser menos y el 24 de julio escribieron un artículo donde se afirmaba: "Mientras los miristas se matan entre ellos en la lucha por el poder y el dinero fuera del país, hasta donde huyeron cuando las fuerzas de seguridad empezaron a actuar, en Chile las pseudo organizaciones humanitarias comenzaron a des-

prestigiar al gobierno acusándolo en recursos de amparo que la policía y los servicios de inteligencia detenían a 'inocentes'. Incluso hay recursos de emparo en que se dice que testigos observaron cómo fuerzas policiales detuvieron a determinadas personas cuyo paradero se desconoce. Sin embargo, ahora se establece que todo era falso; que la acción formaba parte de la campaña internacional para desprestigiar al país puesto que los miristas 'presuntivamente detenidos en Chile', se encontraban fuera del país realizando acciones ilícitas. Ahora sus cadáveres son encontrados en Argentina, Panamá, México, Colombia y Francia".

A esa fecha, la dirección de *La Tercera* la ejercía Alberto Guerrero Espinoza, y la subdirección Héctor Olave Vallejos, actual editor de los servicios informativos de *El Mercurio* y designado Premio Nacional de Periodismo 2003, galardón que en palabras del Ministro de Educación y presidente del jurado, Sergio Bitar, se le concedió para "dar una señal de fortalecimiento del prestigio de un periodismo serio, sólido, ético y al servicio de la libertad de expresión".





La Iglesia en la mira

La Iglesia Católica, transformada "en la voz de los sin voz" desde los albores de la dictadura, concentró las críticas de la prensa oficialista, pauteada por Jaime Guzmán y otros connotados representantes del integrismo criollo, a través de las páginas de *El Mercurio*, *La Segunda* y la revista *Ercilla*.

En agosto de 1976, los obispos Enrique Alvear, Carlos González y Fernando Ariztía viajaron a Riobamba, Ecuador, para asistir a una reunión eclesial a la que concurrían otros obispos y sacerdotes del continente. A poco de iniciarse, fueron detenidos dos arzobispos y 15 obispos por la policía de la recién instaurada dictadura y acusados de asistir a un cónclave subversivo.

Tras un escándalo internacional, los obispos regresaron a Chile y fueron agredidos por agentes de la DINA a su llegada a Pudahuel. La Conferencia Episcopal acusó directamente a *El Mercurio*, *La Segunda*, *El Cronista* y TVN de haber creado el ambiente para ese ataque. El

periodista y escritor Guillermo Blanco hizo un pormenorizado estudio de ese episodio en su libro *Los incidentes de Riobamba y Pudahuel* (ICHEH, 1977) donde demuestra la manipulación noticiosa para atacar a la Iglesia católica chilena.

El Comité Pro Paz, primero, y la Vicaría de la Solidaridad, después, fueron cotidianamente cuestionados por los diarios de Agustín Edwards. Lo mismo que los párrocos que valientemente asumieron la defensa de los pobladores en los barrios más pobres de las ciudades, así como los obispos que intentaban evitar los atropellos, las detenciones arbitrarias, las muertes y las desapariciones.

EL COMITÉ PRO PAZ Y LA VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD, LOS PÁRROCOS Y LOS OBISPOS QUE ASUMIERON LA DEFENSA DE LOS PERSEGUIDOS SUFRIERON EL PERMANENTE ACOSO DE LA PRENSA OFICIALISTA.

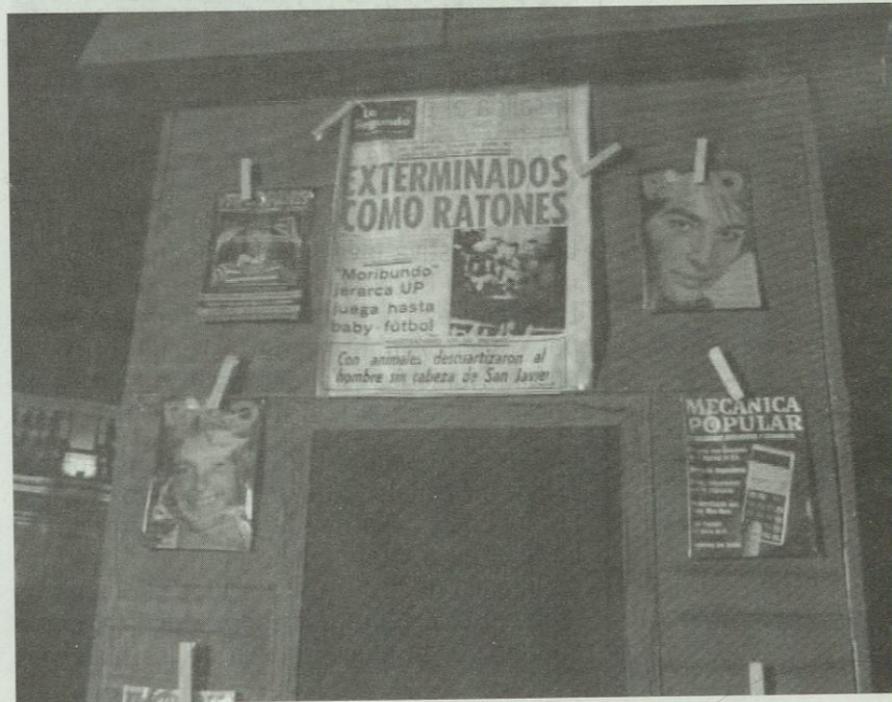
A la caza del PC

A comienzos de diciembre de 1976, el Comando Conjunto que dirigía Roberto Fuentes Morrison, el "Wally" inició una operación de exterminio de la tercera dirección clandestina del Partido Comunista. En tres semanas fueron detenidos 13 militantes, entre ellos Fernando Ortiz, quien ocupaba el máximo cargo en el partido. Poco después, el régimen militar aseguró que varios de ellos habían dejado el país y que incluso una de las desaparecidas, Reinalda Pereira, con ocho meses de embarazo, figuraba cruzando la cordillera a pie pese a tener un embarazo de ocho meses.

La dictadura falsificó las hojas de ruta del paso fronterizo Los Libertadores para demostrar que los dirigentes comunistas habían abandonado el país rumbo a Argentina. Ese solo antecedente bastó para que el ministro en visita, Aldo Guastavino, sobreesayera la causa, mientras la prensa promilitar ayudaba a encubrir los crímenes.

El 10 de febrero de 1977, bajo el título "Se Cerró Investigación de los Desaparecidos", *El Mercurio* afirmó: "El Ministro en Visita, Aldo

Guastavino, designado el 31 de enero para investigar la desaparición de ocho personas, cerró el sumario el lunes pasado, después de de-



clarar agotada la investigación. El Ministro Guastavino había oficiado al Ministro del Interior solicitando los antecedentes de las ocho personas presuntamente desaparecidas, y recibió de esa Secretaría de Estado un oficio que adjuntaba copias de los certificados de viaje expedidos por Extranjería de la Policía Civil, en que consta la salida al país de esas personas”.

Haciendo gala de celo y rigor profesional, destacó un enviado especial, el periodista Oscar Medina, quien, en el lugar de los hechos y tras una exhaustiva investigación, logró establecer que “la Policía Internacional de Los Libertadores confirmó con documentación el paso hacia Argentina de las ocho personas presuntivamente (*sic*) desaparecidas, cuya situación estudió el Ministro Guastavino”.

En tanto, *La Segunda* tituló en primera plana, el 9 de diciembre: “Nueva Felonía Marxista Ante los Tribunales: No hay Tales ‘Desaparecidos’”. En la crónica interior, bajo el título, “Descifrada Infamia de los ‘Desaparecidos’: Comunistas Viajaron al Exterior haciendo Dedo”, el diario informó: “Una nueva felonía de los marxistas

ha quedado en evidencia luego que el Ministro Guastavino cerrara definitivamente el sumario que ordenó instruir la Corte Suprema, por el presunto desaparecimiento de ocho personas. El magistrado, en su amplia investigación, estableció con acopio de antecedentes que los ‘presuntos desaparecidos’ salieron del país hacia territorio argentino con toda su documentación y en algunos casos, a falta de medios de locomoción colectiva, hicieron dedo, aprovechándose de la buena voluntad de los automovilistas. La campaña de los marxistas contra el régimen del Presidente Pinochet no descansa. Con tal de empañar la imagen de nuestros gobernantes son capaces de las peores felonías, como la descubierta por el ministro Guastavino. No podían permanecer no sólo trabajando en la clandestinidad contra todos los chilenos que aman la libertad y tranquilidad lograda en los tres años de gobierno, sino que además planearon otra infamia: pedir a los tribunales de justicia la designación de un ministro en visita para que investigara el desaparecimiento de ocho ‘dirigentes sindicales’, en su mayoría de filiación comunista ()”.

El Informe Valech

La Comisión sobre Prisión Política y Tortura en Chile analizó la responsabilidad de los medios de comunicación y el periodismo en las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, citando casos que resultan ejemplares sobre la actuación de los medios.

Menciona un editorial de *El Mercurio* titulado "La dura batalla de Chile", del 5 de octubre de 1973, en donde se lee: "Los allanamientos militares y operativos policiales no se están efectuando sin motivo. Muy por el contrario, los continuos hallazgos de arsenales y demás elementos destinados a una larga lucha de guerrillas o a la formación de un verdadero ejército irregular, demuestra que para todos los fines jurídicos y de seguridad pública, el país se encuentra en estado de guerra. Por tal motivo, la aplicación de las disposiciones pertinentes del Código de Justicia Militar está plenamente justificada, como puede apreciarse en las informaciones de televisión, de radio, de revistas y de diarios, además de la experiencia personal de muchos ciudadanos. (...) Lamentablemente el imperativo del éxito de las acciones militares impide muchas veces que pue-

LOS EDITORIALES DEL PERÍODO SON LA PRUEBA INCONTRARRESTABLE DE LA COMPLICIDAD DE LA PRENSA DE DERECHA CON LA DICTADURA Y SU BARBARIE.

dan exhibirse con toda oportunidad y con amplia divulgación las pruebas de la alta traición cometidas por los responsables del régimen anterior y los partidos políticos que lo apoyaron".

Esta misma actitud se mantiene por varios años, sobre todo en los medios televisivos y en la empresa El Mercurio. El Informe Valech menciona como otro ejemplo un editorial de *Las Últimas Noticias* de su edición del 16 de abril de 1978, donde se afirma: "La libertad de expresión es —además de un derecho de los pueblos— uno de los más sólidos baluartes democráticos. Los medios de comunicación con acreditación, con respeto, han sido mantenedores de la facultad, sin caer en desbordes. Buen criterio, ponderación y responsabilidad han sido la tónica imperante desde el 11 de septiembre de 1973".⁴

⁴ Ver www.servicios.gov.cl/comisión/imagenes/informe-tortura/capitulo3.pdf.

La historia oficial, sin embargo, alimentada por editores interesados o pusilánimes, comenzó a quebrarse a partir de 1976 con la aparición de revistas como *Solidaridad*, *APSI*, *Análisis* y *Hoy*, que se sumaron a la hasta entonces solitaria revista *Mensaje*, y se convirtieron en fuentes alternativas de información, dejando en evidencia, además, a los medios oficialistas.

Aquellas revistas y los hombres y mujeres que en ellas trabajaron contribuyeron de una manera decisiva al conocimiento de la verdad y a la defensa de los derechos más elementales de los chilenos.

A ellas se sumaron luego *La Bicicleta*, *Cauce*, *Fortín Mapocho* y el diario *La Época*, determinantes junto a algunas radios como *Cooperativa* y *Chilena*, en las duras luchas que se dieron en los años 80 para recuperar la democracia.

Hoy, ninguno de esos medios escritos existe. No obstante, gracias al apoyo de la dictadura y a la opción preferencial de los gobiernos de la Concertación, *El Mercurio*, *La Segunda*, *Las Últimas Noticias* y *La Tercera*, siguen más sólidos que nunca.

mea culpa

CON EL TÍTULO "EL MEA CULPA DE UNA PERIODISTA", EN NOVIEMBRE DE 2004 EL PERIÓDICO *THE CLINIC* PUBLICÓ UN TEXTO QUE RESULTA ESTREMECEDOR PARA QUIENES EN LOS AÑOS 70 Y 80 LEÍAN LOS ARTÍCULOS FIRMADOS POR MARÍA ANGÉLICA DE LUIGI EN EL CUERPO D DE EL MERCURIO.

SUS ARTÍCULOS DE CADA DOMINGO EXAMINABAN LA MARCHA POLÍTICA DEL PAÍS. SIN EMBARGO, NUNCA ESCRIBIÓ NI INVESTIGÓ SOBRE DERECHOS HUMANOS.

"¿Alguien planteó en alguna pauta en *El Mercurio* que había que hacer un reportaje a los cuarteles de la Dina?

Yo tampoco.

No puedo culpar a nadie. Nunca se me censuró.

Mientras a otras chilenas les rompían la vagina con animales, botellas, electricidad, les daban

puñetazos y mataban a sus hijos y padres, yo le leía cuentos a mi hijo, pololeaba, iba a las bañías de los periodistas en El Tabo, usaba zuecos y minifalda, carreteaba, ¡era feliz!”.

¿Recuerda a colegas de su generación que tomaron un camino distinto?

“Mientras Mónica González, Patricia Verdugo, la Camus, la Monckeberg, la dulce y angustiada Elena Gaete, del *Apsi*, arriesgaban la vida, yo me daba gustos de perra fina bajo los aledos de *El Mercurio*”.

Y rememora “una conversación sofocante en un sillón del viejo Congreso en 1973” con el “pelao Carmona: ‘Angélica, lo que se viene es un gorilazo, aquí se viene la CIA con todo, va a ser un baño de sangre’. Y yo: ‘Ya está con tu paranoia del imperialismo y la custión, pelao’. Y después te encontré en un párrafo de crónica, ametrallado en una calle de Santiago”.

Se pregunta entonces, “¿qué valor tiene decir ‘lo siento’, así, al voleo? Prefiero personificar:

te pido perdón a ti, periodista Olivia Mora, que cuando naciste traías una bandera de Allende, que fuiste izquierdista de alma, que te la jugaste y nunca fuiste sectaria, que nunca quisiste matar a nadie sino hacer justicia social. Perdona por lo que tuviste que sufrir en el Estadio Nacional, en el exilio, con el asesinato de tu primer marido, el Pepe Carrasco (amigo loco que creíste en mí como periodista).

“Y, Olivia, perdona por no haber hecho nada para cortar la cadena de horror que se llevó a uno de tus hijos.

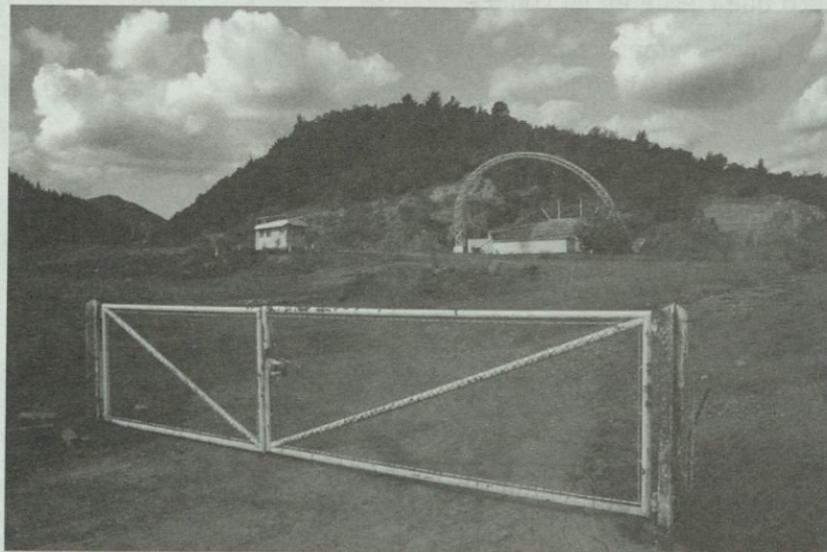
“Fui una perra”.



Colonia Dignidad se desmorona sin red de protección

El auge y la caída del imperio del mal

Manuel Délano¹



LA DETENCIÓN DE LÍDER DE LOS COLONOS, PAUL SCHAEFER, ABRIÓ LA POSIBILIDAD DE JUSTICIA FRENTE A LOS NUMEROSOS DELITOS COMETIDOS EN EL LUGAR, CUANDO VILLA BAVIERA YA NO TIENE UNA RED NACIONAL E INTERNACIONAL QUE LA PROTEJA. SCHAEFER Y SUS CÓMPlices ESTÁN SIENDO JUZGADOS. LOS HALLAZGOS DE ARMAS, EVIDENCIAS LIGADAS A DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EL FIN DEL SILENCIO DE LOS COLONOS HAN CORROBORADO LAS DENUNCIAS QUE DURANTE MUCHOS AÑOS FUERON DESMENTIDAS.

Por fin, 45 años después de su instalación en Chile, Colonia Dignidad parece estar llegando al término de su existencia como un feudo con sus propias reglas dentro del país. La acción combinada de los poderes del Estado chileno está poniendo punto final a la organización que dirigió Paul Schaeffer, detenido en Argentina en marzo de 2005.

Después de investigar los delitos por violaciones a los derechos humanos cometidos por los dirigentes de los colonos, un juez, Jorge Zepeda, ha concentrado en sus manos todos los procesos, salvo aquellos por violación de menores,

que investiga el magistrado Hernán González. El Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte en estas causas y tiene en su mira acusadora a la Colonia Dignidad. El gobierno ha nombrado un delegado para asegurar que en esa parte del territorio se respeten las leyes y terminen los atropellos contra los propios residentes.

Se está descorriendo el velo del misterio que rodeó como un halo a la Colonia durante décadas. Todo lo que se denunció en el pasado sobre las prácticas atroces que se cometieron en este recinto, y que en su oportunidad fue desmentido una y otra vez por los defensores de la Colonia, está ahora siendo confirmado por las investigaciones.

Torturas, asesinatos, atentados, robo de autos, tráfico y escondrijos de armas, pederastia, aplicación de drogas a víctimas, separación de hombres y mujeres, trabajo forzado, no pago de salarios ni previsión, secuestro de menores, inhumación y/o cremación clandestina de restos de víctimas de la dictadura. La lista de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad supera la imaginación.

¿Cómo pudo sobrevivir impune el enclave alemán hasta la caída de Schaefer, a pesar de todas las acusaciones y denuncias en su contra desde mediados de los años sesenta?

La respuesta es sencilla y cada vez más nítida: una vasta y enmarañada telaraña de protección encubrió lo que acontecía en este territorio del sur chileno. Dirigentes y políticos de la derecha, militares, funcionarios del Estado, empresarios y, en especial, la dictadura, fueron el manto protector que amparó a Colonia Dignidad. Por razones ideológicas, por revanchismo con la izquierda, por dinero o motivos comerciales y hasta por factores como la admiración —abierta o embozada— a la disciplina y orden germano, el servilismo frente a quienes tienen pelo rubio, e incluso por incredulidad debido a la naturaleza de las denuncias, diferentes personas, todas influyentes, apoyaron a la Colonia y desmintieron o cerraron los ojos frente a las acusaciones.

No vieron ni quisieron ver... hasta que Schaefer fue detenido y comenzó a desmoronarse su imperio del mal.

¹ Periodista, corresponsal en Chile del diario *El País* de España, académico, autor de *La herencia de los Chicago boys*, en *Nosotros los Chilenos* N° 1, *Zapping al Chile actual*, del artículo *Santiago de los extremos*.

Instrumento de la represión

Colonia Dignidad fue un matadero humano y formó parte de la mayor organización criminal que ha conocido la historia republicana chilena, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo jefe, el general Manuel Contreras (entonces coronel) daba cuenta a diario de la represión contra los opositores al único militar a quien le reconocía autoridad, el general Augusto Pinochet.

En las instalaciones de la Colonia estuvieron detenidos y fueron hechos desaparecer prisioneros políticos, uno de los engranajes que requirió para su imposición el modelo económico y político que impuso la dictadura. Los cambios económicos, sociales y políticos que impulsaron los militares y sus asesores civiles en la sociedad chilena en los años setenta y ochenta fueron de tal envergadura, que su aplicación y operación eficaz requería del exterminio de varios miles de personas, el exilio de muchos más y el temor de millones. Las transformaciones no habrían podido ser puestas en vigor

EN LAS INSTALACIONES DE LA COLONIA ESTUVIERON DETENIDOS Y FUERON HECHOS DESAPARECER PRISIONEROS POLÍTICOS, UNO DE LOS ENGRANAJES QUE REQUIRIÓ PARA SU IMPOSICIÓN EL MODELO ECONÓMICO Y POLÍTICO QUE IMPUSO LA DICTADURA.

con la velocidad y radicalidad que tuvieron sin las víctimas de Pinochet.

Durante 17 de sus 45 años de existencia, Colonia Dignidad fue uno de los instrumentos, quizá uno de los más tenebrosos, de la represión que requería la imposición forzada del nuevo modelo de desarrollo.

Pero este es sólo un aspecto de Colonia Dignidad. A este papel que desempeñó en la dictadura debe agregarse el mesianismo de su líder pedófilo, un fanático anticomunista, carismático, autoritario, seductor y con la suficiente capacidad de convicción como para que un grupo de alemanes shockeados por la guerra creyera en su supuesta labor misionera y emigrara siguiéndolo hasta Chile. Con sus prósperos campos, un pulcro restaurante en Bulnes, que sirvió para las relaciones públicas del recinto, una escuela y un hospital gratuitos (gracias al apoyo estatal) para los campesinos pobres de las parcelas cercanas a Dignidad, y exención de impuestos, Schaeffer logró dar una imagen de orden, que atrajo y encandiló a muchos.

Torturas por sobre el umbral

En 1975, el entonces estudiante de Medicina —hoy médico siquiatra— Luis Peebles ya estaba curtido con las torturas. Llevaba tiempo detenido como dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la Universidad de Concepción y conocía a fondo las mazmorras de la dictadura. Había sido golpeado, apaleado, le habían aplicado corriente. Diferentes grupos represivos, en Concepción y en Santiago, se ensañaron con él. Pero nunca antes había llegado al umbral máximo del dolor humano que experimentó en la Colonia Dignidad, cuando después de una de las frecuentes sesiones de parrilla y quemaduras de cigarrillos, engrillado y con los ojos vendados, lo tenían desnudo y acurrucado en un cajón de madera, de cerca de un metro cuadrado, donde apenas cabía una persona.

“Me golpearon a palos hasta que me convertí en una piltrafa humana y me desmayé”, relata Peebles. El cajón lo golpeaban con palos y fierros y mediante una palanca lo hacían girar. Generalmente quedaba con los pies hacia arriba, y cuando quedaba hacia abajo, apenas se

apoyaba en las puntas de los dedos. “Esto me ocasionaba horribles dolores”. Al desmayarse, le arrojaban baldes de agua y proseguían. Después le aplicaron el “submarino seco”: una bolsa de plástico apretada en la cabeza y lo volvieron a meter en el cajón cabeza abajo.

“Hasta aquí no más llegamos”, pensó entonces y, para sobrevivir, como no podía no responder, respondía cualquier cosa en el interrogatorio, “inventaba lo más fantástico e inverosímil, lo que fuese necesario”, recuerda. A cualquier persona que supiera que estaba en el extranjero, le inventaba que tenía un arma. “Hasta una punto 30 y una bazuca llegué a inventar”. Todo, para aplacar a sus torturadores.

Uno de sus interrogadores, Fernando Laureani, de la brigada Caupolicán de la DINA, siempre exigía saber más. Metros más allá, en una pieza contigua, una ex militante del MIR, Marcia Merino, que después de las torturas terminó como colaboradora y agente de la DINA, transcribía a máquina las grabaciones de estas sesiones.

EL CONTRASTE EN COLONIA DIGNIDAD DEL CAMPO LIMPIO CON LA SANGRE Y EL DOLOR DE LOS PRISIONEROS ERA QUIZÁ TAN BRUTAL COMO LAS MISMAS TORTURAS.

Logró engañar a los agentes. Sólo estuvo seis días en el lugar. Los torturadores lo llevaron a terreno a verificar en Concepción lo que decía y terminó saliendo de las manos de la DINA en Dignidad y volviendo a las de la Armada. Por eso Peebles puede hoy contar lo que le sucedió en los primeros años de la dictadura y ser uno de los testigos claves de la justicia: el primer torturado que reconoció en Chile en el anciano y detenido Paul Schaefer (84 años) a quien le aplicaba los tormentos.

Mientras Schaefer y sus secuaces —entre ellos al menos uno hablaba en portugués— masacraban a los prisioneros políticos, afuera trinaban los pájaros, mugían las vacas, cacareaban las gallinas y las rubias mujeres de la villa iban a trabajar con sus faldas bávaras. Se olía la tierra, vigorosa y saludable, y el guano fresco. El ambiente era pulcro, con “aroma a detergente en todos lados”. Parecía una idílica postal campestre.

El contraste del campo limpio con la sangre y el dolor de los prisioneros era quizá tan brutal como las mismas torturas.

Los inmigrantes alemanes sabían torturar. Schaeffer, en especial. Serio, sin expresión, frío, con su ojo de vidrio, dando instrucciones en alemán, retando a quienes tardaban o no lo hacían bien, instigando a usar más violencia, con tono agresivo. “Era como un técnico en torturas”, dice Erick Zott, otro prisionero político del MIR que compartió el destino de Peebles y pudo vivir para contarlo. En la Colonia, la tortura era más “científica”, describe, igualmente dolorosa que en otros lugares, pero más planificada y estudiada, sin torturadores que gritaban en forma histérica como en otros campos de prisioneros.

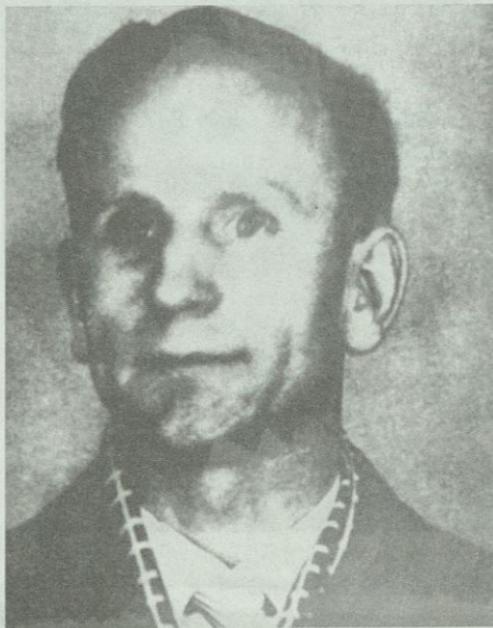
Peebles y Zott escucharon el zumbido del generador eléctrico de la Colonia y las comunicaciones radiales en clave con la DINA. Incluso contrastaron por radio las declaraciones de Zott con las de otro prisionero torturado simultáneamente en Santiago.

Al lado de la Colonia, Villa Grimaldi parecía casi como un “lugar de descanso”, afirmó irónicamente Zott a la organización humanitaria Amnistía Internacional.

Los colonos en sus primeros años en Chile.
La fotografía está al interior de la Colonia Dignidad, 1964.



Paul Schaefer, ex cabo del ejército nazi y predicador, huyó de Alemania a Chile cuando la justicia lo buscaba por abuso de menores.



La dominación de los espíritus

Los orígenes del imperio de Colonia Dignidad en Chile se remontan a la Alemania dividida de la pos Segunda Guerra Mundial, en una secta religiosa formada en los años cincuenta, encabezada por Paul Schaefer, un ex cabo y enfermero del ejército nazi. Nacido en 1921 en Sieburg, cerca de Bonn, el menor de tres hermanos varones (dos de los cuales murieron en la guerra), vivía con su madre, Frau Schmitz. Schaeffer, que perdió su ojo derecho en un accidente en la infancia, después del conflicto bélico trabajaba como guía espiritual de jóvenes, realizando sesiones de oración y lectura de la Biblia. Antes lo había hecho como predicador evangélico.

A su grupo se unió la comunidad bautista que encabezaba el pastor Hugo Baar, y se instalaron en Sieburg, donde la Colonia tiene su sede alemana. Los fieles adoptaron el nombre de Misión Social Privada y se fijaron como objetivo "cuidar y orientar" a la juventud. En 1960 inauguraron un orfanato con la presencia de autoridades del Ministerio de la Familia Alemán.

Tal como lo hicieron después en Chile, sus integrantes trabajaban entregando casi todos sus ingresos a la Misión Social Privada, lo que les permitió con rapidez acumular, crear empresas y efectuar negocios rentables. Por su actividad de beneficencia quedaron exentos del pago de impuestos.

De esta época datan las primeras acusaciones contra Schaefer. Igual que lo hicieron en Chile, la secta erigió en Alemania un muro que no permitía ver su interior y los pocos visitantes que podían ingresar observaron que había instalaciones modernas para esa época, y extraños equipos como parlantes y grabadoras en cada pieza. Eran instrumentos que entonces usaba Schaefer para imponer su voluntad tiránica. Después perfeccionaría en Chile estos métodos.

Para controlar a los miembros de su comunidad y doblegar voluntades, Schaefer dispuso que todos debían confesarse periódicamente con él. En las reuniones grupales la entrega era total: los asistentes expresaban sus pensamientos y emociones públicamente para "maldecir al diablo". Los niños tenían que hacer obligatoriamente un diario de vida donde anotaban sus actividades o eran castigados.

Además, los teléfonos estaban intervenidos, no entregaban a los miembros de la secta la correspondencia y paquetes que les enviaban desde el exterior y se les prohibía contactarse con sus familiares, hasta sus conversaciones privadas eran grabadas con micrófonos ocultos y nadie podía salir sin permiso. Quien no respetaba estas reglas era un "pecador", estaba entregado "al demonio" y Schaefer exigía —y obtenía— de sus fieles la entrega total, con el pretexto que la comunidad sirviera mejor a Dios. Heinz Kuhn, uno de los fundadores de la Colonia Dignidad, y que después se fugó en 1968, contó en 1989 a la periodista Mónica González, de revista *Análisis*:

—(Schaefer) nos pidió el 10% de nuestras entradas y nosotros accedimos. Después ya no fue el 10%, nos pidió nuestra vida eterna con todos nuestros bienes. Yo acepté. Todos aceptamos. Eramos unas 250 personas. Creo que lo que Schaefer hizo con nosotros fue un proceso de dominación del espíritu. No tenía voluntad para negarme a ninguno de sus pedidos. Fueron tres años, aproximadamente, los que se demoró en poseer nuestras voluntades a través de su prédica y evangelización.

Cuando las acusaciones de abusos sexuales y golpizas a menores comenzaron a ser investigadas por la Fiscalía de Bonn, y se expidió una orden de arresto, Schaefer huyó precipitadamente de Alemania. Muchos de sus seguidores no alcanzaron siquiera a enterarse. Hugo Baar explicó entonces a las autoridades que la Misión Social Privada había separado aguas de su líder.

Después lo supieron: Schaefer emigró a instalar su secta en Chile, donde ingresó el 27 de julio de 1961, cuando gobernaba Jorge Alessandri.

Historia del imperio

Con una recomendación previa del entonces embajador de Chile en Alemania Federal, Arturo Maschke, quien destacaba la "eficiencia, orden y limpieza" de la Misión Social Privada, y otra del Ministerio de la Familia alemán, Schaefer convenció a las autoridades de que iba a realizar una labor de beneficencia. Ofreció construir un hogar para niños campesinos pobres, víctimas del terremoto de 1960. A 40 kilómetros de Parral hacia la cordillera encontró el lugar ade-



Colonia Dignidad, 1960.

cuado: el fundo San Manuel, que los colonos compraron en 35.000 escudos en 1961.

Pronto hicieron prosperar las 3.000 hectáreas originales —hoy son sobre 15.000, gracias a su expansión presionando a los vecinos para que vendieran— tal como antes lo lograron en Alemania. Con la llegada de los colonos, cerca de 250, su trabajo de sol a sombra, sin salario, festivos, descansos ni pago de previsión o salud, pronto dio sus frutos y en el fundo, llamado ahora El Lavadero, se constituyó la Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad. Esta forma de trabajo permitió instalaciones que en el presente incluyen 40 edificaciones, aeródromo, casino, hospital, escuela, cementerio, casas para huéspedes, jardines amplios, 50 kilómetros de caminos internos, inversiones en otros lugares (el restaurante y molino de Bulnes y la casa de huéspedes de Santiago, en las cercanías del Estadio Nacional, una planta chancadora de mineral, un astillero).

Tal como en Alemania, los colonos instalaron una cerca en el perímetro del lugar, que los dejaba ocultos del mundo externo. La vigilancia incluyó cámaras ocultas en árboles, túne-

les, sensores de movimientos, micrófonos en ceniceros, vallas electrificadas, perros policiales, guardias armados y una estación de radio.

Schaefer aplicó la misma política de las confesiones que le había permitido doblegar voluntades en Alemania y segregó rigurosamente a las familias: hombres y mujeres dormían aparte entre ellos —incluso los casados— y de sus hijos. Al residir en otro país, con un idioma diferente al natal, Schaefer pudo monopolizar fácilmente las comunicaciones externas de los colonos. Con el apoyo de la camarilla dirigente, aumentó su dominio sobre las personas.

Cuando el Estado llegó al lugar después de la detención y procesamiento de Schaefer, hubo colonos que relataron que jamás habían leído un diario chileno. Solo los dirigentes tenían receptores de radio. Televisión solo hubo en la etapa final, y en los espacios comunes. Los calendarios eran privilegio de los dirigentes, por lo que los colonos perdían la noción del paso del tiempo.

Así Schaefer consiguió disponer de un paraíso privado en Chile para abusar sexualmente de

niños varones. Siempre dormía con ellos, han contado numerosos testigos.

"Onkel Paul" (tío Paul), como llamaban en la Colonia a Schaefer, era bromista, enérgico y sabía comunicarse con los menores de edad. "Se adapta a los niños y tiene muy claro cómo ganarse su confianza", explicó el médico Hartmut Hopp cuando era portavoz de la Colonia. Según la revista alemana *Stern*, Hopp fue durante un período el "sprinter" favorito de Schaefer, como éste llamaba al niño que lo acompañaba como su compañero diurno y nocturno. Heinz Kuhn, que también fue portavoz de los colonos antes de escapar del lugar, explicó tiempo después que a Schaefer "sólo le gustan los niños de hasta doce años".

La parvularia Lotti Packmor, que también se fugó del lugar, testimonió que los niños de ocho a doce años dormían de espaldas y desnudos, en camarotes. "Si había alguna reacción sexual, el niño era sacado y se lo trataba con picanas eléctricas. Los chicos recibían inyecciones en los testículos, que se hinchaban terriblemente".

PARA IMPEDIR FUGAS DE COLONOS Y CONTROLAR A LOS VISITANTES, EN DIGNIDAD HABÍA CÁMARAS OCULTAS EN ÁRBOLES, TÚNELES, SENSORES DE MOVIMIENTOS, MICRÓFONOS EN CENICEROS, VALLAS ELECTRIFICADAS, PERROS POLICIALES, GUARDIAS ARMADOS Y UNA ESTACIÓN DE RADIO.

Los abusos de Schaefer

Declaró seis horas frente al juez Jorge Zepeda. Nacido como Efraín Morales en 1967, en las cercanías del fundo El Lavadero, su mamá lo llevó al hospital de la Colonia por problemas respiratorios cuando tenía dos meses de edad. Jamás volvió a salir hasta que escapó en diciembre de 2002.

Fue adoptado por los colonos. Hoy se llama Efraín Vedder Veuhoff. Sus hermanos le dijeron después que su madre trató de verlo y los colonos lo impidieron. Vedder (38 años) le contó a la periodista Claudia Guzmán, de *El Mercurio*:

—El (Schaefer) quería bañarme. Dejarme bien limpio, decía. Primero se hizo mi amigo. Me llevaba en su Mercedes y así fue creciendo la confianza. No me dio regalos, pero sí me hizo cariño.

“El abuso de Schaefer ya está hecho. Muchos tienen vergüenza de hablar, y los entiendo, porque no sólo era abuso de menores. A mí me pasó desde los ocho hasta los 25 años”.

Cuando entre los clientes del restaurante que tiene la Colonia Dignidad en Bulnes (atendido por colonos) había mujeres dando pecho a sus hijos, les pedían no mirar, porque los que “hacían eso eran chanchos”. Solo cuando se fugó de la Colonia conoció una mujer. Dice que nunca vio prisioneros, pero sí sus autos, guardados llenos de polvo en un galpón donde secaban las pieles de conejo, los que debieron enterrar cuando ganó el No en el plebiscito de 1988.

Vedder se querelló contra Schaefer y sus secuaces por trabajo forzado, estafa, secuestro y daño neurológico provocado por la administración de drogas.

La segregación entre varones y mujeres y las medidas para retardar el desarrollo sexual extienden la niñez síquica de los colonos hasta los 30 años. Las relaciones sexuales entre hombres y mujeres estaban prohibidas y quien desafiaba las normas era sometido a trabajos forzados, golpizas y sesiones de electroshock y drogas, según las denuncias. "Nadie puede mantener una relación sentimental ni casarse si Schaefer no lo autoriza", declaró Kuhn.

Quienes eran enviados al batallón de trabajo realizaban labores pesadas y debían vestirse de rojo de día y de blanco en la noche, para dificultar una eventual huida. Una rebelde, Ursula Schmidtke, fue golpeada, le aplicaron electricidad y su cuerpo apareció después en el río Perquilauquén, denunció Kuhn, aunque finalmente el certificado sostuvo que había fallecido de neumonía.

Después de tres tentativas, en 1966, a los 18 años, Wolfgang Müller fue el primer colono que se fugó y alertó sobre el campo de concentración que Schaefer había erigido en el lugar y en el que lo había violado a él y a otros niños. Otros colonos que también lograron escapar,

como Georg y Lotti Packmor, Hugo Baar, Salo Luna y Tobías Müller, con pocas variaciones narraron experiencias similares.



Funeral de Ursula Schmidtke. Según denuncias, ella fue golpeada y torturada, aunque el certificado médico indicó neumonía.



Wolfgang Müller.

Testimonios de dos fugados

Al lograr su libertad y sentirse seguros, dos de los fugados de la Colonia han contado haber sido sometidos al mismo tipo de abusos por parte de Paul Schaefer, con 30 años de diferencia. Son Tobías Müller (24 años), que huyó con Salo Luna en 1997, y Wolfgang Müller, que lo hizo en 1966, a los 21 años. Sus testimonios indican que durante más tres décadas Schaefer mantuvo sus prácticas pedófilas.

Wolfgang Müller: A los doce años "y a las seis horas de conocerlo me llevó a la cama y abusó de mí. Lo mismo hacía con los otros muchachos (...)

Schaefer es el dictador. Lo que él pide se hace sin discusión".

Tobías Müller: "Como todos los niños de la Colonia, fui obligado por el señor Schaeffer a tolerar prácticas sexuales sodomitas, entre los 12 y los 18 años (...) Lo hace siempre con los niños que son más jóvenes y que no saben distinguir. Schaefer les puede hacer lo que quiere y ellos no se dan cuenta, lo encuentran como cariño".

Tobías Müller: "La primera vez sucedió cuando yo tenía 11 años y medio, y cuando era miembro del servicio, una actividad de la cual formábamos 18 jóvenes, los más chicos, que tienen obligación de servir a Paul Schaefer. Le tienen que llevar la maleta,

en cuyo interior porta una pistola y una lupa, porque no puede leer bien".

Tobías Müller: "(Últimamente) formaba parte de la Juventud de Vigilia Permanente, un grupo de 30 muchachos, que como el resto no podíamos ducharnos solos, teníamos que hacerlo en grupos, bajo su vigilancia. Algunas veces nos jabona y disfruta tocando los testículos".

Wolfgang Müller: "En la Colonia hay aproximadamente 70 menores de edad y sus actividades homosexuales continúan con ellos. Cada día un niño hace turno como 'ayudante' de Schaefer, lo que incluye dormir con él".

La batalla de Aylwin

Una segunda fuga, de una mujer de 62 años, Vilhelmine Lindeman, que terminó cuando ella regresó al fundo El Lavadero, motivó al intendente de la zona durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Héctor Taricco, a visitar el lugar. Se encontró con una barrera que impedía el tránsito en el camino de acceso, que ordenó destruir.

Por esta acción suya la Colonia pidió su desafuero y el del gobernador de Parral, acusándolos de "prevaricación y abuso contra particulares". Hermann Schmidt, entonces presidente de la Sociedad Benefactora, sostuvo que Schaefer se había marchado con un revólver y dejó una carta en que insinuaba su suicidio... Algo parecido dijeron 30 años después los colonos, al referirse a un posible "suicidio colectivo", cuando la policía allanaba el recinto en busca de Schaefer, sin encontrarlo.

Ahora se sabe la verdad: cuando lo iban a buscar, el líder de la secta se escondía en uno de los bunkers subterráneos del recinto.

El entonces senador demócratacristiano Patricio Aylwin defendió al intendente Taricco y cri-

tó a Colonia Dignidad en 1968. Sostuvo en el Senado que los colonos se presentaban como "mansas ovejas", pero con grabadoras ocultas, recordó que Schaefer tenía orden de arresto pendiente en Alemania, pidió el sometimiento de los colonos a la legalidad del país y que respondieran satisfactoriamente varias preguntas, entre ellas:

- ¿Qué razones los determinaron a venirse a Chile y con qué objetivo se instalaron aquí?
- ¿Qué papel desempeñó Paul Schaefer en la organización? ¿Por qué razón se lo mantuvo oculto durante varios años en la Colonia, negando que se encontrara allí?
- ¿Por qué en el Acta de Fundación de la sociedad anunciaron el propósito de proteger a los numerosos niños que quedaron huérfanos a consecuencia de los sismos de 1960, en circunstancias que esos sismos no ocasionaron sino escasas muertes?
- ¿Por qué los niños colonos que hacen estudios primarios en la escuela que existe en el fundo no aprenden castellano?

"¿POR QUÉ LOS NIÑOS COLONOS QUE HACEN ESTUDIOS PRIMARIOS EN LA ESCUELA QUE EXISTE EN EL FUNDO NO APRENDEN CASTELLANO?", PREGUNTÓ EN 1968 EL ENTONCES SENADOR PATRICIO AYLWIN.

- ¿Son verdaderamente libres todos los colonos de Dignidad? (...) ¿Por qué nunca salen solos o en pequeños grupos a conocer el país, a visitar las ciudades más cercanas?

Muchos años después, en 1991, cuando las respuestas a la mayoría de éstas y otras preguntas se conocían —por las investigaciones judiciales en Alemania y de la prensa opositora a la dictadura en Chile— siendo Presidente de la República, Patricio Aylwin le quitó la personería jurídica a la Colonia, el primer paso importante para poner fin a este enclave tiránico.

El presidente Patricio Aylwin dio el primer paso importante contra la Colonia Dignidad al quitarle en 1991 su personalidad jurídica.



Un brazo de la DINA

Los testimonios de quienes han escapado coinciden en que el compromiso de Schaefer con la derecha comienza abiertamente con su temor de que sean afectados por las expropiaciones de tierras durante el gobierno de la Unidad Popular. Cuando varios fundos cercanos estaban tomados, Schaefer se contactó con la organización de ultraderecha Patria y Libertad, que encabezaba el abogado Pablo Rodríguez, quien hoy dirige la defensa de Pinochet en tribunales.

El mismo Schaefer esperó en 1972 en su Mercedes Benz azul en el aeropuerto de Colonia Dignidad a Roberto Thieme, secretario general de Patria y Libertad. Thieme llegó hasta el lugar acompañado por Federico Willoughby, el general Alfredo Canales y el dirigente estudiantil Francisco Prat. Después regresó en varias oportunidades y recibió el apoyo de Schaefer para preparar a los grupos de choque de Patria y Libertad, aunque el adiestramiento era dirigido por "ex oficiales de Marina y Ejército con cursos de comando en academias norteamericanas". En 1973 Thieme simuló que su avión se había perdido y caído, aunque en realidad estaba oculto en la Colonia.

El contacto y la relación amistosa entre anticomunistas era esperable: Schaefer y varios de los colonos de más edad habían estado en las filas nazis, para quienes el principal peligro era la Rusia comunista. Cuando Allende fue elegido, los colonos estudiaron refugiarse en Canadá, Australia y Argentina, donde tenían una propiedad, relató Hugo Baar. Otro colono fugado, Heinz Kuhn, ha contado que fotografió una torre de alta tensión ubicada frente al fundo por encargo de Schaefer, y que este envió después un grupo a volarla con explosivos.

Para los dirigentes de Dignidad, el 11 de septiembre de 1973 fue un día de celebración. En las calles de Linares varios colonos salieron a patrullar armados con el Ejército, en una cacería de partidarios de la Unidad Popular. Parral, que tuvo muchos más detenidos desaparecidos que ciudades bastante más grandes, estaba copada por los militares.

Los colonos tenían abundantes armas: las importaban o fabricaban ellos mismos, como se descubrió mucho después, en 2005, cuando se

encontraron dos de sus arsenales sepultados, pero con las armas bien guardadas y en condiciones de ser usadas de inmediato. Pronto los parientes de los detenidos comenzaron a enterarse de que las víctimas eran trasladadas por el camino hacia Colonia Dignidad.

La relación de Schaefer con la DINA fue estrecha. Muchos ex militantes de Patria y Libertad pasaron de este grupo de ultraderecha a ser agentes de la DINA.

La pobreza caracteriza las tierras cercanas a Colonia Dignidad y contrasta con la riqueza de la explotación de los colonos.



Detenidos desaparecidos en la Colonia

Para que los prisioneros no se enteraran, los hombres de la DINA llamaban a Colonia Dignidad "los alemanes". Pero las confesiones de dos ex agentes de este organismo revelaron lo que allí ocurría. Uno de ellos es Samuel Fuenzalida, que en 1974 acompañó como guardia el traslado del dirigente del MIR Alvaro Vallejos, conocido en su partido como *Loro Matías*, desde Villa Grimaldi con destino a "Puerto Monti". En la DINA, esta clave significaba que el destino de un prisionero era morir en tierra.

"El intuía que lo iban a asesinar y se comportó con gran dignidad, aunque estaba en muy malas condiciones por la tortura", recuerda Fuenzalida. Iban en una camioneta y el capitán que la conducía, Fernando Gómez, habló en alemán a quienes los recibieron en la Colonia. Uno de los anfitriones, a quien llamaban "profesor", recibió al prisionero, partió con éste y el capitán de la DINA. Al poco rato regresó el capitán a la casa de huéspedes y después lo hizo el "profesor", con un perro pastor alemán negro. Este hizo un gesto con ambos bra-

zos y dijo "fertig", que en alemán significa, "liquidado", "terminado".

Desde entonces Vallejos es uno de los más de mil detenidos desaparecidos en Chile. Fuenzalida después reconoció al "profesor" como Paul Schaefer. La ficha de Vallejos, ratificando que había estado en la Colonia, es una de las 40.000 que la policía encontró en el lugar en 2005.

Fuenzalida no duda de la identificación, porque después viajó en una segunda oportunidad a Colonia Dignidad y volvió a ver a Schaefer. Además, en la DINA era vox populi que numerosos agentes se habían entrenado ahí y que Pinochet había estado en el lugar en 1974 y los colonos le habían obsequiado un auto Mercedes.

El segundo agente que reveló información fundamental sobre el papel de la Colonia Dignidad en el organigrama de la DINA fue Juan Muñoz Alarcón, quien poco antes de ser asesinado entregó su testimonio a la Vicaría de la Solidaridad, en 1978. Muñoz Alarcón, que se había separado del Partido Socialista antes del golpe militar, reconoció que él era el temible "encapuchado del Estadio Nacional" que en 1973 se paseaba en

EL ENCAPUCHADO DEL ESTADIO NACIONAL, EL ASESINADO EX AGENTE DE LA DINA JUAN MUÑOZ, DENUNCIÓ EN 1978 QUE EN COLONIA DIGNIDAD AÚN QUEDABAN DETENIDOS DESAPARECIDOS CON VIDA, "EN MALAS CONDICIONES FÍSICAS, MUCHOS DE ELLOS AL BORDE DE LA LOCURA POR EL TRATAMIENTO MUY DURO QUE HAN PASADO".

medio del recinto deportivo con su rostro cubierto, indicando a los soldados los prisioneros que debían ser fusilados.

Su testimonio es dramático y en varios aspectos ha sido corroborado posteriormente. Un dirigente de la Colonia, Albert Schreiber (hoy prófugo y buscado por la justicia), reconoció que ellos habían prestado ayuda a Muñoz, a petición del periodista Daniel Galleguillos, y que éste y su familia vivieron en el fundo El Lavadero.

Muñoz sostuvo en su testimonio a la Vicaría de Solidaridad que en Colonia Dignidad "funciona el Centro de Adiestramiento de la Inteligencia Nacional, regido por alemanes nacionalizados chilenos; son antiguos alemanes que arrancaron de la guerra, llegaron ahí muy jóvenes y tienen un verdadero regimiento en la Colonia Dignidad, donde hay un hospital que tiene todos los adelantos, con aviones ambulancia y con aviones correo y con cárceles subterráneas".

"Ahí se me preparó para interrogar gente y para hacer tareas de contrainteligencia. Me explico: se me pedía que me reincorporara a la clandestinidad del partido para aparentar ser uno de ellos.

Desgraciadamente, digo afortunadamente, esto no pude hacerlo porque yo estaba muy quemado. Posteriormente se me ha ocupado en tareas de cazar gente, de interrogarla, de torturar y de matar".

Afirmó haber participado en "la desaparición de algunas personas que están en la Colonia Dignidad; hay 112 personas en estos momentos en esa Colonia, antiguos dirigentes de los diferentes partidos de la Unidad Popular".

"Quiero dejar constancia, jurar si es preciso, que parte de los prisioneros están vivos, en malas condiciones físicas, muchos de ellos al borde de la locura por el tratamiento muy duro que han pasado. Me refiero especial a Carlos Lorca, a (Exequiel) Ponce, jefe del frente interno del Partido Socialista. Están en la Colonia Dignidad, están en el pabellón segundo (...)"

"Esta gente, hasta el momento, no tiene ninguna posibilidad de salir viva. Porque desde el momento que se desconoce su detención es porque eran hombres importantes dentro de la clandestinidad, y en este momento se les mantiene vivos utilizándolos para cazar al resto".

Die Jugend von heute

Die Jugend liebt heute den Luxus.
 Sie hat schlechte Manieren,
 verachtet die Autorität,
 hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten,
 sie schwätzt, wo sie arbeiten sollte .

Die Jungen stehen nicht mehr auf,
 wenn Ältere das Zimmer betreten .

Sie verschlingen bei Tisch die Speisen
 und legen die Beine übereinander .

Sie widersprechen ihren Eltern
 und tyrannisieren die Lehrer .

Na, können Sie dieser Ansicht zustimmen ?
 Wenn ja, dann befinden Sie sich
 in bester Gesellschaft:

La Juventud de hoy

Hoy, la juventud ama el lujo .
 Tiene malos modales
 desprecia a la autoridad
 ya no tiene respeto a la gente mayor,
 es habladora en vez de trabajadora .

Los jóvenes dejaron de ponerse de pie,
 al entrar personas mayores en la pieza .

En la mesa , engullen los guisos
 y ponen una pierna sobre la otra .

Contradicen a los padres
 y tiranizan a los profesores .

¿ Cómo ? ¿ Está conforme con tal opinión ?
 Siendo así, Ud. se encuentra
 en la mejor compañía :

La señora Lucía en la Colonia Dignidad

"La señora Lucía (Hiriart de Pinochet) contó a *Las Últimas Noticias* que el esfuerzo de los integrantes de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad la había conmovido", escribió en marzo de 1985 la periodista Celeste Ruiz de Gamboa, enviada especial de este diario a la ceremonia de inauguración de la remozada escuela "Las Campanillas" del Fundo San Manuel.

La esposa de Augusto Pinochet afirmó en esa oportunidad que "cuando hay tensión, interés, deseo de hacer cosas, siempre es posible trans-

formar algo tan feo en algo tan bonito". Al preguntarle sobre su impresión de que los alemanes de la Colonia Dignidad regalen una escuela, Hiriart respondió: "Ellos están hace tantos años en Chile que yo creo que se sienten parte de nuestra patria y creo que también es parte de su razón de ser, de su raza (...) pienso que cuando el chileno es bien guiado y tiene buen ejemplo, también puede hacer cosas".

Según la redactora del artículo, "la impresión de la Primera Dama estaba plenamente justificada". Relata que los invi-

tados vieron una película donde se veía que cuando la Colonia compró el fundo había "aridez, desolación, humedad", los baños eran de cajón. Después la música cambia de ritmo en el documental. "Hombres rubios y de ojos azules fabrican ladrillos, ponen cemento, pintan" para remozar la escuela y "el conjunto de casas se empieza a parecer a esa imagen de estampa postal que recibe el afuerino (...) parece una lámina de cuentos infantiles".

Hermann Schmidt, presidente de la Sociedad Benefactora, tomó el micrófono y explicó a

Primera Dama inauguró escuela en Dignidad

● Colonia alemana remozó el viejo establecimiento educacional del fundo San Manuel.

PARRAL (Celeste Ruiz de Gamboa, enviada especial).— 56 niños hoy, cuando de la campana repique anunciando que las puertas de la escuela están abiertas para iniciar un nuevo período de clases, ingresaron a "Las Campanillas". Es una escuela, pero no se trata simplemente de un recinto más. Es un local construido con manos extranjeras, manos alemanas, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, baldosa a baldosa.

Ayer, la Primera Dama de la Nación cortó la cinta tricolor. La hermosa construcción rural recibió una completa inspección de las autoridades, y la señora Lucía contó a "Las Últimas Noticias" que el esfuerzo de los integrantes de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad la habla conmovido.

"Para mí ha sido fantástico. Demuestra que cuando hay lesón, interés, deseo de hacer cosas, siempre se puede, siempre es posible transformar algo tan feo en algo tan bonito. Y además, demuestra que se pueden recuperar muchos edificios. Eso yo creo que es bien importante, sobre todo en estos momentos en que estamos pasando por el problema de los sismos. Cuando están los edificios en mal estado hay ciertas partes y cierto modo de recuperarlos

tantos años en Chile que yo creo que se sienten parte nuestra y creo también que es muy bueno que toda la sangre alemana que ha llegado a confundirse con la nuestra y pienso que el Chileño, cuando es bien guiado y tiene buen ejemplo, también puede hacer cosas.

La impresión de la Primera Dama estaba plenamente justificada. Los invitados a la ceremonia vieron una película del lugar hace dos años, cuando Colonia Dignidad compró el fundo San Manuel. Azidez, desolación, humedad. La escuela apenas se equilibraba sobre sus vetustos pilares. Los servicios higiénicos eran baños de cajón. Mugre, sordidez. Ese era el ambiente en que los niños asistían a la escuela para aprender las primeras letras. La cámara de los alemanes retrata la casaca en invierno, en medio de la lluvia y el lodo. Y luego, la música cambia de ritmo. Ya no es triste. Manos amigas inician la reconstrucción. Hombres rubios y de ojos azules fabrican ladrillos, ponen cemento, plantan. Mujeres son las que, con moldes, hacen las baldosas. (En la oscuridad de la sala de proyección, se escucha nítida la voz de la señora Lucía: "Me va a decir, herr



La señora Lucía recorre el refaccionado establecimiento. (Foto de A. Márquez).

espaciosas que, más que la verdad, parece una lámina de un libro de cuentos infantiles.

En ese entorno, bajo sauces centenarios y coloridos, macizos de flojes recién plantadas que brotan por doquier, la orquesta de la Sociedad interpretó la Canción Nacional. Y las voces de niños rubios, mezcladas con las de típicos campesinos, todos haciendo el mismo uniforme, se elevan y resoban en la cordillera.

Herman Schmidt, presidente de la Sociedad Benefactora Dignidad, se acerca al micrófono.

"Queríamos un ambiente

timos orgullosos de ser parte".

Enrique Fuentes, presidente de la Asociación de Amigos de la colonia, dijo que los alemanes "trabajaron sin descansar durante las vacaciones de verano para tener todo listo. Aquí no hay un aporte fiscal. Y la construcción se ha financiado con lo que ellos obtuvieron durante los largos meses que trabajaron para la Sociedad Colbún. Siempre hacen obras de beneficencia en forma silenciosa. Pero esa excesiva modestia da ventajas a quienes tratan de desconocer su acción", y finalmente, mencionó que los niños, a partir de hoy tendrán un lugar limpio y digno para estudiar. "Y quienes trabajaron con tanto ahínco, se reintegrarán silenciosos a sus labores habituales".

Se produjo un silencio. Y un hermano alto y macizo se paró frente a la orquesta. Su vozarrón se elevó nítido. "Chile, Chile, donde aprendí a querer, donde aprendí a sufrir, donde quiero morir". Los niños alemanes en un extremo, rubios y hermosos. Al otro costado los campesinos del sector, atildados para la ocasión. La bandera chilena flameaba al compás del viento. Las ramas de los sauces susurraban la melodía. Un ambiente idílico,

la señora Lucía: "Queríamos un ambiente sano y limpio para la juventud de este sector. Es nuestro deseo colaborar con la tarea del gobierno que nos ha devuelto la paz y el orden. Es nuestra piedra que aportamos para el Chile del futuro". Enrique Fuentes, presidente de la Asociación de Amigos de la Colonia, explica que los alemanes de este recinto "siempre hacen obras de beneficencia en forma silenciosa. Pero esa excesiva modestia da ventajas a quienes tratan de desconocer su acción".

Hartmut Hopp canta "Chile, Chile, donde aprendí a querer, donde aprendí a sufrir, donde quiero morir". La periodista describe a los niños alemanes como "rubios y hermosos" y afirma que los cisnes en la laguna son "tan gordos que no parecen de verdad".

El artículo ocupa una página casi completa de *Las Últimas Noticias* del 21 de marzo de 1985. Lo ilustra una foto de Lucía Hiriart de Pinochet recorriendo Colonia Dignidad.



Arsenales, fichas secretas y tumbas clandestinas

Georg Packmor, que estaba a cargo del mantenimiento de los vehículos de la Colonia, al fugarse dio a conocer la lista de patentes de varios autos, que coinciden con los modelos y marcas de algunos de los autos de detenidos desaparecidos, con los cuales se quedaron los agentes como botín. El juez Zepeda encontró en 2005 enterrados los motores de dos autos, que también coinciden con los de algunas víctimas.

EN LOS ARSENALES DE COLONIA DIGNIDAD HABÍA UN MISIL TIERRA-AIRE, LANZACOHETES, AMETRALLADORAS, GRANADAS, METRALLETAS CON SILENCIADOR, MUNICIÓN, DETONADORES, MINAS, MORTEROS Y PROYECTILES.

Pero el principal hallazgo de Zepeda, quien ha logrado información de los propios colonos, han sido dos arsenales sepultados seis metros bajo tierra, en tres contenedores, al interior del fundo El Lavadero y en un terreno junto al restaurante en Bulnes, y 43 mil fichas secretas de víctimas y personas relacionadas con la Colonia (incluyendo amigos de ésta), también ocultas bajo tierra, en 18 cajas.

Los depósitos de armas son los más grandes encontrados en democracia. Incluían

lanzacohetes, ametralladoras, granadas, metralletas con silenciador, munición, detonadores, minas, morteros y proyectiles. El arma más letal era un misil tierra-aire, de cuya existencia se deduce que debe haber un lanzamisil sepultado en alguna parte, junto con más armas. Todas estaban bien conservadas y operativas y algunas incluían manuales.

Entre los artefactos curiosos, propios del espionaje, había una sobaquera que mediante arneses disparaba una pistola cuando quien la llevaba, levantaba ambos brazos, una cámara fotográfica que lanzaba dardos y bastones eléctricos.

Las 43 mil fichas tienen información entre 1973 y 1987 con antecedentes de prensa, datos cerrados y otros proveniente de torturas y abarcan personajes tan diferentes como el parlamentario socialista Camilo Escalona, el actor Julio Yung, el ex agente de la DINA Michael Townley. Fueron elaboradas por la DINA y comprueban que la Colonia fue parte de este organismo de seguridad y que por el lugar pasaron detenidos desaparecidos.



Versiones de prensa indican que existe información en las fichas sobre la vida privada de personas que el juez Zepeda prefiere no sea conocida, en especial en un período electoral, según ha trascendido.

Tras el hallazgo de las fichas, un reportaje del periodista Mario Aguilera en *Diario Siete* afirmó que a fines de los años setenta los colonos exhumaron cuerpos de detenidos desaparecidos sepultados en el lugar y quemaron sus restos en los hornos industriales de la Colonia durante "cuatro macabras semanas", para eliminar las evidencias contra Schaefer y la DINA. Se basó en fuentes no identificadas que informan al juez Zepeda. Otras informaciones recuerdan la masacre de prisioneros en "Cerro Gallo", al interior de la Colonia.

Esto habría ocurrido en forma paralela a la llamada operación "retiro de televisores", que fue el operativo del Ejército para exhumar los cuerpos de desaparecidos de los lugares clandestinos donde estaban sepultados y arrojarlos al mar o quemarlos para eliminar todo vestigio de ellos.

Amistades poderosas

El compromiso estrecho con la represión permitió a la Colonia Dignidad operar sin que el Estado interfiriera, vigilara o siquiera se interesara por sus actividades. Los colonos lograban que la burocracia les aprobara, sin muchas preguntas y con gran celeridad, importaciones, adopciones de niños y resoluciones favorables en los tribunales. Nadie los fiscalizaba y gozaban de una incontrarrestable influencia en las instituciones estatales de las ciudades cercanas. Fue el "premio" a su fidelidad con la dictadura.

Sin duda, el principal amigo poderoso que tuvo la Colonia en Chile fue el ex dictador Augusto Pinochet. Se conocen dos de sus viajes, uno ya mencionado, y otro en 1987, cuando llegó en helicóptero a la sede de Bulnes del enclave. En una foto que reprodujo en 2001 el diario *El Centro* de Talca, y que recorrió el mundo, Pinochet aparece junto al hoy procesado Hartmut Hopp.

Al ex dictador lo saludaron cantando uno de sus temas favoritos, *Yo tenía un camarada*, el

canto de batalla nazi. El hijo del jefe de la DINA, Manuel Contreras Valdebenito, recordó en revista *Cosas* la foto de Pinochet y la señora Lucía junto a Schaefer.

Miembros de la Junta Militar estuvieron también entre las visitas frecuentes de la Colonia, entre ellos el general César Mendoza.

Antes de ser ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, el abogado Jaime del Valle fue defensor de Colonia Dignidad, según dijo Hopp a *El Mercurio*. Un ministro de Defensa de la dictadura, vicealmirante (r) Patricio Carvajal, defendió a brazo abierto la Colonia en 1987. Sostuvo que su labor "es ejemplar", según pudo constatar en una visita que hizo al lugar el 18 de octubre de 1987, junto a un grupo de ocho personas, entre ellos su esposa, hijo menor y oficiales del ministerio.

Según un artículo de *El Mercurio* que informó de esta visita, Carvajal sostuvo que no es efectiva "la leyenda negra" sobre lo que allí sucede. Dijo haber recibido un informe en que la Colonia reconocía haber tenido problemas con personas declaradas indeseables, pero que se

trataba de casos de no adaptación y de alcohólicos que no se han podido recuperar. El artículo se titula con una cita del ministro Carvajal: "Labor de la Colonia Dignidad es Ejemplar".

Hace algunos años, escandalizando a la derecha, la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga no solo admitió sus visitas a la Colonia, sino que mencionó a otras personas. "Yo sé que Jaime Guzmán le dio clases a Pablo Longueira, Luis Cordero y Andrés Chadwick (todos de la UDI) en el interior de la Colonia Dignidad". El asesinado ex senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán fue fundador de este partido, ex asesor de Pinochet y ex dirigente de Patria y Libertad.

Según Madariaga, ellos "eran adoctrinados en ese lugar, ahí se les formó políticamente, les hacían clases, Jaime Guzmán los instruía y les daba charlas, lo hacía al estilo platónico, se paseaba por los campos dictando clases. Todos ellos sacaron un gran provecho de Colonia Dignidad. Ahora no dicen nada".

LOS AMIGOS MÁS INFLUYENTES DE LA COLONIA DIGNIDAD HAN SIDO EL EX DICTADOR AUGUSTO PINOCHET Y SU ESPOSA LUCÍA HIRIART. MIEMBROS DE LA JUNTA, EX MINISTROS Y POLÍTICOS DE LA DERECHA ERAN VISITAS FRECUENTES.

También mencionó entre los visitantes al senador de la UDI Hernán Larraín. Agregó que Hopp la atendió como médico a ella y su madre, de manera "extremadamente gentil". Madariaga cenó en varias ocasiones con Schaefer. Lo único extraño que le llamó la atención era que si alguien quería salir de la pieza debía avisar antes por teléfono. Negó haber estado en la red de protección de los colonos. Después admitió la posibilidad de haberse equivocado en el caso de Longueira.

Chadwick negó la imputación de Madariaga, aunque admitió que Guzmán había estado dos días en el lugar y que Larraín ha valorado la "labor social y asistencial" de la Colonia. "La señorita Mónica Madariaga miente. Es completamente falso todo lo que dijo. Longueira y yo no hemos estado un minuto en ese lugar. No lo conocemos". La madre del fallecido senador Guzmán, Carmen Errázuriz, calificó los dichos de la ex ministra como un "ataque gratuito, extemporáneo y falso".

Madariaga replicó a Chadwick: "Los mentirosos son ellos". Agregó que la madre del sena-

dor "está desinformada". En una carta que envió a Errázuriz, la ex ministra de Justicia sostiene que las visitas de Guzmán a Colonia Dignidad "no tuvieron otro objetivo que el utilizar la paz de la naturaleza para instruir a la juventud, que decía ser su seguidora (...) si ello, a su juicio, constituye una bajeza, créame que lo lamento", según informó *La Tercera*.

Para intentar frenar la ofensiva del Presidente Aylwin contra Colonia Dignidad, un grupo de 17 parlamentarios de la derecha y designados —entre ellos, Sergio Diez, Sergio Fernández, Sergio Onofre Jarpa, Sergio Romero, Olga Feliú, Bruno Siebert, Santiago Sinclair y William Thayer— hizo una presentación al Tribunal Constitucional en 1991. La principal excepción en las figuras de la derecha fue Sebastián Piñera. Después, en 1994, otros parlamentarios formaron un grupo de amigos del hospital y la escuela de Villa Baviera y más tarde votaron contra la constitución de una comisión investigadora y hasta algunos criticaron el despliegue policial cuando Investigaciones allanaba una y otra vez el lugar en busca de Schaefer.

Un defensor de la Colonia arrepentido

La primera impresión de Manuel Contreras Valdebenito, el hijo del ex jefe de la DINA, al visitar la Colonia Dignidad en 1974, cuando tenía 13 años, fue estar en una ciudad alemana de la Segunda Guerra Mundial, "como si el tiempo se hubiera detenido", relató a la periodista Verónica Foxley en revista *Cosas*.

Describe a los colonos como "muy aburridos" y dice que no hablaban español. Iba la plana mayor de la DINA con sus familias, casi todos los ministros de Pinochet y Jaime Guzmán y

sus cercanos, cuenta. En una ocasión, Schaefer sacó un disco de vinilo que tenía una svástica y durante una hora escucharon todos discursos de Hitler. Manuel Contreras padre estaba atónito, dice su hijo, pero "Schaefer estaba feliz".

Los lazos se estrecharon desde 1982. Los colonos blindaron el auto de Contreras. Cuando el ex jefe de la DINA se enfermó de cáncer al colón se hizo la quimioterapia en Colonia Dignidad por ofrecimiento de Hartmut Hopp. Después a él lo trataron por una fractura. "Te-

nían todo de lo mejor, todo de punta". Contreras Valdebenito enseñó taekwondo a los colonos durante tres semanas. En 1995, en democracia, Schaefer se quebró una pierna en un cerro. Los alemanes pidieron ayuda al Ejército, que envió un helicóptero y lo bajaron.

"Mi papá hablaba mucho con Schaefer y le daba muchos consejos de cómo tenía que conducir la Colonia (...) Nunca le pregunté a mi papá el porqué de esta estrecha relación. Es que yo veía que la gente de la Colonia era rara, pero parecían



ser buenas personas, trabajadores (...) yo creo que mi padre veía esto como un mundo socialista de derecha”.

El hijo del jefe de la DINA cuenta que Schaefer tenía gran puntería. Dice que nunca supo nada de Villa Baviera como centro de tortura. Afirma en el relato:

“Cuesta imaginar lo sórdido que terminó siendo el lugar donde pasé tantos fines de semana. Es muy impactante darse cuenta que Paul Schaefer era un pedófilo, un degenerado. Si mi padre lo hubiese sabido, jamás nos habría expuesto a nosotros a algo tan macabro. Una cosa es ser un asesino, un criminal, pero la verdad es que la pedofilia traspasa todos los límites posibles. Cuando se empezaron a conocer los abusos a menores, mi padre nos comentó: ‘¡Qué increíble, éstos eran todos maricones!’ En una oportunidad yo defendí públicamente a la Colonia y la verdad es que ahora me arrepiento profundamente”.

Los colonos también tuvieron amistades poderosas en Alemania. Funcionarios y políticos de la derechista CSU (Unión Social Cristiana) visitaban con frecuencia la Colonia. Algunos la describieron como un “paraíso”. En homenaje al líder de la CSU y ex premier bávaro, Franz Joseph Strauss, un visitante ilustre de la Colonia cuya foto está en el hall de entrada de la casa de huéspedes, Schaefer bautizó el lugar como “Villa Baviera”, por sugerencia del ex jefe de la DINA.

Un ex oficial de las SS y considerado de los mayores traficantes de armas del mundo, Gerhard Mertins, fue el fundador de los amigos de la Colonia. Cuando visitó el recinto dijo haberse llevado una “gran impresión”. Tanto que, además de volver y de visitar con frecuencia la casa que los colonos tenían en Sieburg, les ayudó a importar armas. Uno de sus envíos, de más de una tonelada de municiones en 82 cajas, en el buque *Nedlloyd Manila* en 1987, fue retenido en Antofagasta, pero terminó al parecer llegando a sus destinatarios, según la revista *Stern*.

ENTRE LAS AMISTADES INFLUYENTES EN EL MUNDO ESTUVIERON EL EX PREMIER BÁVARO FRANZ JOSEPH STRAUSS Y EL TRAFICANTE DE ARMAS GERHARD MERTINS.

Fernando Villagrán

Cuando el verdugo vistió de paisano

4

Felipe Agüero

Los civiles (la derecha) en la represión

26

Manuel Salazar

¿Oportunistas, ingenuos, cómplices o encubridores?

50

Manuel Délano

El auge y la caída del imperio del mal

68



Una investigación periodística del programa Contacto de Canal 13 contribuyó a facilitar la detención de Paul Schaeffer en Argentina. El gobierno chileno pidió al de Argentina su expulsión dando inicio al desmoronamiento de Colonia Dignidad.

Fernando Villagrán

Cuando el verdugo vistió de paisano

4

Felipe Agüero

Los civiles (la derecha) en la represión

26

Manuel Salazar

¿Oportunistas, ingenuos, cómplices o encubridores?

50

Manuel Délano

El auge y la caída del imperio del mal

68

Trabajan en LOM: Comité Editorial Silvia Aguilera, Juan Aguilera, Mauricio Ahumada, Mario Garcés, Luis Alberto Mansilla, Tomás Moulán, Nain Nómez, Julio Pinto, Paulo Slachevsky, Verónica Zondek **Relaciones Públicas** Claudia Apablaza **Proyectos** Ignacio Aguilera, Carlos Cociña **Diseño y Diagramación Editorial** Ángela Aguilera, Hugo Ortiz de Pinedo, Claudia Quintero **Corrección de Pruebas** Raúl Cáceres **Exportación** Ximena Galleguillos **Página web** Leonardo Flores **Producción** Eugenio Cerda **Impresión Digital** Carlos Aguilera, William Tobar **Preprensa Digital** Ingrid Rivas, Daniel Véjar **Impresión Offset** Eduardo Cartagena, Héctor García, Luis Palominos, Rodrigo Véliz, Francisco Villaseca **Corte** Eugenio Espíndola, Sandro Robles **Encuadernación** Rodrigo Carrasco, Sergio Fuentes, Carlos Muñoz, Miguel Orellana, Marcelo Toledo **Diseño y Diagramación Computacional** Guillermo Bustamante, César Escárate, Juan Pablo Godoy, Claudio Mateos **Servicio al Cliente** Elizardo Aguilera, Carlos Bruit, José Lizana, Edgardo Prieto **Difusión y Distribución** Alejandro Abufom, Elba Blamey, Luis Fre, Carlos Jara, Rodrigo Jofré, Marcelo Melo, Nelson Montoya, Pedro Morales, Leonidas Osorio, Jorge Peyrellade **Librerías** Nora Carreño, Ernesto Córdova **Área de Administración** Jaime Arel, Mirtha Ávila, Alejandra Bustos, Alejandra Céspedes, Diego Chonchol, Aracelly González, Sylvia Morales, Marcos Sepúlveda. *Se han quedado en nosotros Adriana Vargas, Anne Duattis, Jorge Gutiérrez y Marcos Bruit.*

UNIVERSIDAD DE CHILE



3 5601 15799 3977

NÚMEROS ANTERIORES:

- (1) ZAPPING AL CHILE ACTUAL. Mosaico de luces y sombras.
- (2) SEXO Y DERECHOS. Las nuevas batallas por la igualdad.
- (3) EL DESPERTAR DEL PUEBLO MAPUCHE. Nuevos conflictos, viejas demandas.
- (4) NERUDA: EL CHILENO MÁS UNIVERSAL.
- (5) EL MUNDO DE LAS POBLACIONES.
- (6) SEPTIEMBRE.
- (7) NUESTRO COBRE.
- (8) LOS TRABAJADORES DEL SIGLO XXI.
- (9) JUVENTUDES DE CHILE.
- (10) AUTORRETRATO DE CHILE.
- (11) MUJERES QUE HACEN HISTORIA.
- (12) EL PODER DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS.
- (13) EXILIO Y RETORNO.
- (14) PUEBLOS INDÍGENAS OLVIDADOS Y EXTINTOS.



9 789562 827935

PELIGRO
LA FOTOCOPIA
MATA AL LIBRO

Nosotros los chilenos / 15

FERNANDO VILLAGRÁN - FELIPE AGÜERO - MANUEL SALAZAR - MANUEL DÉLANO

Represión en dictadura: el papel de los civiles

Hombres y mujeres reclutados de entre la ciudadanía tuvieron también activa presencia en la represión que arrojó miles de víctimas durante el régimen del general Augusto Pinochet.

El periodista y economista **Fernando Villagrán** expone las formas que asumió la participación civil en la ola de terror desatada tras el golpe militar de septiembre de 1973. El cientista político **Felipe Agüero** afirma que el régimen militar chileno tuvo un carácter más institucional que otros, en buena medida por el apoyo de la derecha, que respaldó tanto las reformas económicas y políticas como la represión. El periodista **Manuel Salazar** indaga en la forma como la prensa escrita informó de la represión para demostrar que un entrañable lazo unió a sus dueños y responsables con el régimen de Pinochet. El periodista **Manuel Délano** analiza un episodio particularmente execrable de participación civil en los crímenes de la dictadura que recién hoy, a quince años del retorno de la democracia, comienza a esclarecerse: el caso de Colonia Dignidad.

* Foto portada : Paulo Slachevsky.